

LA GUERRA NO LO AGOTA TODO

CRÓNICAS SOBRE MASACRES Y DESARRAIGOS

LEONARDO HERRERA DELGHAMS - FAUSTO PÉREZ VILLARREAL



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

LA GUERRA NO LO AGOTA TODO

CRÓNICAS SOBRE MASACRES Y DESARRAIGOS

LEONARDO HERRERA DELGHAMS
FAUSTO PÉREZ VILLARREAL

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
DECANO: JORGE ARTURO SALAZAR MANRIQUE

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
SANTA MARTA
BOGOTÁ. D.C., DICIEMBRE DE 2011

Herrera Delghams, Leonardo

La guerra no lo agota todo: crónicas sobre masacres y desarraigos / Leonardo Herrera Delghams y Fausto Pérez Villarreal.—Santa Marta: Universidad Sergio Arboleda, 2011

110p.

ISBN 978-958-8350-83-7

1. CONFLICTO ARMADO—SANTA MARTA (COLOMBIA). 2. VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO – SANTA MARTA (COLOMBIA). 3. DESPLAZAMIENTO FORZADO – SANTA MARTA (COLOMBIA). I. Pérez Villarreal. II. Título

303.62 ed.21

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
LA GUERRA NO LO AGOTA TODO:
CRÓNICAS SOBRE MASACRES Y DESARRAIGOS

© Leonardo Herrera Delghams

leonardo.herrera@usa.edu.co

© Fausto Pérez Villarreal

fauper25@yahoo.com

Teléfono: (575) 095-4233551

Decano Escuela de Comunicación Social y Periodismo
Jorge Arturo Salazar Manrique

Primera edición: diciembre 2011

Queda prohibida toda reproducción por cualquier medio sin previa autorización escrita del editor.

Las opiniones expresadas son propias de los autores y no comprometen posiciones oficiales de la Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta

Edición realizada por el Fondo de Publicaciones

Universidad Sergio Arboleda

Carrera 15 No. 74-40

Teléfonos: 3257500. Ext. 2131

www.usergioarboleda.edu.co

Fax: 3177529

Bogotá D.C.

Director editorial: Jaime Barahona Caicedo

Coordinación, y diagramación: Maruja Esther Flórez Jiménez

marujita.florez@usa.edu.co

Diseño carátula: Pedro Gutiérrez y Maruja Esther Flórez Jiménez

Fotografías: Carlos Capella, David Martínez, Oscar Berrocal,

Leonardo Herrera y Fausto Pérez

Impresión: Digiprint

Bogotá, D.C.

ISBN: 978-958-8350-83-7

Dedicatoria

A la memoria de todos los muertos, sus padres, las viudas y los huérfanos que dejó la guerra de los grupos armados ilegales en el Caribe colombiano. Y a la esperanza que renace en aquellos que insisten en recuperar la paz y el progreso que una vez sintieron perder.

A mi hermano Adrián Herrera

Leonardo Herrera Delghams

A mis hijos John Mario, Fausto Enrique y Carlos Alberto

Fausto Pérez Villarreal

Agradecimientos

Los autores deseamos agradecer a la Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta, en especial a la Escuela de Comunicación Social y Periodismo, por su interés en la producción académica promoviendo con ellos avances en la investigación en comunicación, a los doctores **Alfredo Méndez**, rector de esta sede, **Camilo Noguera**, secretario general y al doctor **José Antonio Camargo**, por su asesoría y apoyo constante a este trabajo; por direccionar sus esfuerzos hacia la investigación y a que sus resultados sean socializados a todo público.

A **Grace Angeline Morales Urueta**, amiga y colega, por sus aportes conceptuales y metodológicos a la investigación y a este libro.

Queremos agradecer también a las siguientes personas por ser parte importante en la realización de este trabajo.

A **Orlando Carvajal Quiñonez**, periodista del diario La Opinión de Cucuta; **Álvaro Oviedo Castillo**, editor regional en el Caribe del diario El Tiempo; **Miguel Ángel Herrera Delgans**, magister en educación y profesor de la Universidad del Norte; **Tatiana Velásquez Archibold**, periodista del periódico ADN de Barranquilla; **Carlos Javier Capella** y **Oscar Luis Berrocal**, reporteros gráficos de la Casa Editorial El Tiempo; **Edimer de la Torre**, director del grupo de investigación de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda sede Santa Marta; quienes aceptaron ser lectores críticos de estas crónicas, por sus aportes y opiniones frente al tratamiento de los hechos.

A nuestros estudiantes, **Jenifer Charris** y **Edna Villarreal**, integrantes del Semillero y para quienes esperamos que esta investigación haya sido una experiencia interesante hacia un nuevo enfoque del periodismo.

A nuestros **estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo**, a quienes presentamos este libro y dejamos en sus manos como parte del proceso de transferencia de conocimiento.

Contenido

Prólogo.....	9
Introducción.....	13
CAPÍTULO 1	
El Periodismo tributa la memoria de las víctimas.....	19
La memoria y la verdad.....	21
La función de las memorias	23
Iniciativas de memorias	25
La memoria en el Caribe Colombiano	28
La crónica, narrar para recordar	31
La narración en la reconstrucción de memoria	32
CAPÍTULO 2	
El Escenario que nadie imaginó vivir.....	37
Bolívar ha pagado el precio más alto por la guerra	40
En Magdalena los ‘paras’ son los que más desplazaron	42
El reino de los paras en el Cesar	43
CAPÍTULO 3	
Los Brasiles vuelven a vivir.....	47
Los primeros señores	49
Muertes selectivas	52
La otra masacre	54
La última esperanza	56
CAPÍTULO 4	
El terror golpeó dos veces a El Salado	59
La capital tabacalera de la región	61

Los autores de la masacre	62
Las secuelas de lo vivido	64
El clamor de los salaeros	65

CAPÍTULO 5

En Mejor Esquina empezó la historia de sangre.....	67
Un mar de interrogantes	70
Epicentro de la barbarie	71
El primer muerto	72
La amenaza de Los Magníficos	72
Las huellas del dolor	73

CAPÍTULO 6

La masacre de Chengue	75
Crudas evocaciones	77
Las 28 víctimas	79
¿Qué pasó después?	80
Las consecuencias	82

CAPÍTULO 7

El aciago amanecer de Villanueva.....	83
Los nueve restantes mártires	86
Lo que la gente recuerda	87
En el sur de La Guajira	89

CAPÍTULO 8

La Macabra despedida de año en Cieneguita.....	91
Los ingratos recuerdos de Astrid	92
Un pueblo casi desconocido	93
Más testimonios	94
Villanueva, la última morada	95

CAPÍTULO 9

El día que la guerra llegó a la Ciénaga Grande.....	97
La masacre en Trojas de Cataca	99
Reunión en la iglesia	101
Luto en El Morro	102
La caravana de la muerte	103

Referencias Bibliográficas	107
---	------------

Prólogo

El programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda en la seccional de Santa Marta tiene una apuesta por el estudio de los fenómenos sociales de la región desde una mirada de la comunicación desde una perspectiva transdisciplinar y a la vez inter y multidisciplinar, por eso entendemos y asumimos los hechos de la vida cultural de la Región como espacios en los cuales poder hacer aportes y lecturas desde la comunicación, ubicándolos en la agenda de intercambios y realidades sociales.

Bajo esa mirada buscamos que los trabajos de investigación recojan, analicen y propongan la comprensión de los hechos y sus actores en un contexto en el cual se cruzan distintas realidades para ofrecer desde allí un conocimiento de estas con relación a la comunicación.

‘La Guerra no lo agota todo, Crónicas sobre masacres y desarraigos’ es el resultado de un trabajo de investigación periodística realizado por Leonardo Herrera Delghams y Fausto Pérez Villarreal, docentes de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo. Para la elaboración de esta obra, los autores contaron con el apoyo de las estudiantes Edna Rocío Villarreal y Jennifer Charris, del semillero de investigación constituido para el presente estudio.

Representa una interesante propuesta de la investigación periodística al proceso de construcción de la memoria histórica del conflicto de manera particular en la Región Caribe Colombiana.

Dice Gabriel García Márquez, máximo exponente de las letras de Colombia, que hablar de periodismo de investigación es una redundancia, pues el periodismo, por naturaleza, debe ser investigativo.

En ese sentido, la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda va en concordancia de lo que debe ser el propósito del periodismo, pues su Escuela de Comunicación Social va de la mano de la investigación, haciendo énfasis en el meollo de la historia, yendo más allá del simple y en la mayoría de las veces insensible registro noticioso.

‘La Guerra no lo agota todo, Crónicas sobre masacres y desarraigos’ reconstruye en siete crónicas siete masacres producidas por paramilitares en igual número de territorios de los siete departamentos que conforman el gran bloque del Litoral Norte de Colombia, conocido también como región Caribe.

Los autores refrescan estos episodios valiéndose de la crónica y el reportaje, los géneros mayores del periodismo y, sobre todo, dándole protagonismo relevante a los verdaderos protagonistas de este nefasto capítulo en la historia reciente de nuestro país: los familiares directos de las víctimas.

En el prólogo del libro ‘Tierra de sangre, memorias de las víctimas’, de la investigadora Ginna Morelo, la periodista de El Mundo de España y columnista del diario El Tiempo, Salud Hernández Mora, escribió que “mientras la guerra avanzaba en todos los frentes, los medios de comunicación cometimos muchos pecados, uno de ellos fue conceder casi más protagonismos a los criminales que a sus víctimas. Nos contagiamos de la indiferencia general, del hartazgo, lo que significa que contribuimos a ahondar esos males y a olvidarnos de los seres humanos”.

La finalidad de ‘La Guerra no lo agota todo, Crónicas sobre masacres y desarraigos’ no consiste en regodearse con lo vivido, sino en recordarlo para que no se olvide lo que aquí pasó y no vuelva a repetirse más. En esta obra los criminales no llevan la voz cantante. Aquí se escucha, de manera permanente, la voz de los que pusieron los muertos.

El barrio El Cafetal del municipio Villanueva, en La Guajira; Los Brasiles (corregimiento de San Diego, Cesar); Nueva Venecia, pueblo palafito levantado en las entrañas de la Ciénaga Grandel Magdalena; Cieneguita, una de las ocho comarcas rurales que posee el municipio de Repelón (Atlántico); El Salado, jurisdicción de El Carmen de Bolívar; Chengue, caserío de Ovejas (Sucre) y Mejor Esquina, corregimiento de Buena Vista Córdoba, fueron los territorios que escogieron los autores para realizar esta investigación por haber sido los epicentros de sus respectivos departamentos que fueron golpeados con mayor rudeza por las manos criminales.

Registran las frías e infalibles cifras que en ‘La Florida’, una amplia y acogedora casa campestre ubicada en la entrada de Mejor Esquina, jurisdicción de Buenavista (Sur de Córdoba), ocurrió la noche del 3 de abril de 1988 –Domingo de Resurrección, para ser más exacto- la primera matanza de personas, por parte de paramilitares, en la Región Caribe Colombiana.

Los hechos violentos se seleccionaron basado solo en tres elementos: los catalogados dentro de la categoría de Masacres, aquellos que están presentes en la memoria de los pobladores sin importar la fecha de la ejecución y que pese a las acciones violentas que provocaron desarraigo y casi exterminio, las comunidades afectadas se niegan a desaparecer iniciando procesos de retorno y lucha para conservar su identidad.

La investigación se propone como una apuesta por que las víctimas consigan el espacio para el reconocimiento de su sufrimiento y la injusticia por el olvido de los sucesos pretendiendo ser un espacio de pluralización y democratización de los relatos sobre la guerra en el Caribe colombiano; además de mostrar qué ha pasado con estas localidades después de años de olvido y cuáles son los planes que tienen los pobladores para permanecer en su territorio.

Dejamos a consideración este trabajo periodístico, resultado de una labor de investigación sobre la realidad de nuestra región, a la cual la Universidad Sergio Arboleda y su Escuela de Comunicación Social y Periodismo ha querido aportar una mirada de ese tejido maltratado, y si se quiere vivo de los hechos que si bien enlutan el acontecer, también son traídos en formato periodístico narrativo por este equipo de investigadores como parte de un testimonio dinámico, que no quisiéramos se repita en la historia de la región ni del país.

Jorge A. Salazar Manrique

Decano

Escuela de Comunicación Social y Periodismo

Universidad Sergio Arboleda

Seccional Santa Marta

Introducción

En el afán de controlar la historia y de la memoria, los actores del conflicto manipulan las versiones (...) para justificar sus acciones (...) En un contexto así, un esfuerzo de búsqueda de justicia para las víctimas precisa oponerse a la imposición de una memoria política, la de los vencedores. (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR–, 2009)

En un boletín de prensa del 4 diciembre de 2001, que fue reproducido por los medios de comunicación de todo el país con gran resonancia, los grupos paramilitares anunciaron que: “No realizarán más masacres y que ahora sólo realizarán asesinatos selectivos de no más de tres personas”, reconociendo públicamente y dejando una evidencia histórica de la barbarie que protagonizaron en sus incursiones por los territorios donde tuvieron presencia en el país.

Departamentos como el Cesar, Magdalena y Bolívar quizás han sido los más golpeados por el holocausto desatado por esta estructura guerrillera, cuyos orígenes estuvieron en su lucha por mantener el control militar y político de estas ricas y estratégicas zonas de la Región Caribe colombiana en donde impusieron una aberrante táctica de guerra, sembrando terror con decapitaciones, ejecuciones y torturas en plazas públicas de los líderes o de personas respetadas por la gente o inclusive de un simple conocido en un pueblo vecino.

Las autodefensas en su justificación por las atrocidades que cometieron quisieron ‘vender la idea’ de que sólo perseguían a los auxiliadores de guerrilleros. Pero sus acciones iban más allá, por lo menos así lo reflejaron masacres como la de la Ciénaga

Grande, El Salado y los desplazamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde entre enero de 1999 y noviembre del 2000 dejaron más de 200 muertos y miles de desplazados.

Así fue como silenciaron a la gente humilde que terminó apoyándolos a la fuerza o huyendo despavorida dejando sus pertenencias, su tierra, sus animales y sus casas a la rapiña. La guerra había traído consigo la pobreza, el hambre el abandono y era una prueba clara de la degradación del conflicto interno nacional, no sólo porque afectó a la población civil, sino porque tocó a la población más pobre. Las víctimas saben que más allá del ganado o de la disputa de territorio entre guerrilla y paramilitares, había intereses estratégicos de mucha gente poderosa sobre estos territorios. Algunos están tras las rejas, otros siguen burlando la justicia y a la misma sociedad.

Pese a esta guerra, sumado al desconocimiento del Estado del conflicto interno en que viven los habitantes de remotas poblaciones que son las más golpeados por las balas y los gobiernos paralelos que durante años tomaron el control de sus vidas, estos pueblos han sobrevivido más allá de sus políticos, guerreros y gobernantes, porque mantienen viva su fe y la esperanza de que la paz no es sólo un sueño imposible.

“La guerra tiene un impacto negativo en el tejido social y cultural de la población civil; el conflicto armado lo toca todo, lo permea todo, se apropia de procesos sociales y culturales, de espacios públicos, de las formas como la gente se relaciona e interactúa. Y, sin embargo, la gente, su vida cotidiana y su creatividad no se agotan con la guerra” (Rodríguez, 2008).

Quizás sobre estos temas ha rodado mucha tinta y horas de grabación en los medios de comunicación, pero desde la perspectiva que buscamos abordar los acontecimientos que rodearon la historia violenta de los lugares en mención del presente proyecto la academia estaría haciendo un gran aporte, desde la perspectiva de memoria, a la nueva historia que se comenzó a escribir en el Caribe colombiano.

“Una historia puede ofrecer diversos puntos de vista, más allá de versiones oficiales, además nos brinda un panorama más completo y profundo de las características de las personas involucradas en los hechos” (Sampieri, 2006).

Estas historias están enmarcadas en un contexto histórico y político que permite conocer su pertenencia no sólo en la ubicación geográfica, sino en lo cultural y como identidad de la región. Testimonio de los familiares de las víctimas del conflicto armado, de las personas desplazadas forzosamente, de las retornadas al territorio sin o con el apoyo del Estado, permitirán que este proceso investigativo se convierta en un instrumento de pluralización y democratización de los relatos sobre la guerra en esta región; además de

mostrar qué ha pasado con estas localidades después de años de olvido y cuáles son los planes que tienen los pobladores para permanecer en su territorio.

Es por ello que la investigación plantea como objetivo central el reconstruir las historias de violencia y desplazamiento forzado que vivieron siete comunidades del Caribe colombiano como consecuencia del conflicto armado, siendo la narrativa, mediante el género crónica, la que permita entretener las voces e interpretaciones de las víctimas, sobrevivientes, testigos y residentes a través de la reconstrucción de sus propias historias de vida y vivencias de la guerra, como una forma de contribuir al proceso de memoria histórica.

Por esta razón, la investigación constituye un aporte a la necesidad de reconstruir la memoria histórica, visibilizando por medio del testimonio de las víctimas la historia no oficial del conflicto armado que se evidenció en los hechos de sangre que padecieron comunidades marginadas de los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba, Cesar y La Guajira.

La naturaleza del proceso de reconstrucción de memoria implica la utilización del método cualitativo que permita en primer lugar la exploración de los eventos violentos que se desean reconstruir, seguido del desarrollo de una pregunta que permita activar la memoria individual o la memoria colectiva, y que garantice que el entrevistado evoque la experiencia particular en el marco de una relación respetuosa, humana, cálida y de confianza con el entrevistador y que garantice que el recuerdo sea parte del proceso de sanación y superación de la tragedia y no contribuya a la revictimización.

Los hechos sucedidos son en sí lo suficientemente crudos, fuertes, desgarradores y traumatizantes como para que la intervención del investigador no contribuya a suscitar procesos de exigibilidad de justicia y que en cambio coloque en riesgo de una nueva amenaza al testigo de la historia.

Realizar investigaciones bajo el tópico de la violencia, implica que el investigador deba conocer y anticipar todos los riesgos posibles en su relación con los testigos, algunos de estos es la estigmatización, el aislamiento, la autocensura, la seguridad personal o familiar o repetir el dolor de quien cuenta propiciando una victimización de tipo secundario.

En el primer capítulo de *La Guerra no lo agota todo, crónicas sobre masacres y desarraigos* los autores dejan explícito el mensaje de que no hay mejor vehículo que el periodismo y sus géneros cumbres, la crónica y el reportaje, para que las víctimas de la violencia sean ‘visibilizadas’, y el país conozca la verdad sobre el conflicto armado. La verdad garantiza un acceso necesario a la justicia, y es un elemento clave para

la reparación. Por ello el título de este capítulo inicial no puede ser más exacto: “El periodismo recupera la memoria de las víctimas”.

“El escenario que nadie imaginó vivir”. Así se titula el segundo capítulo, y en él encontramos cifras alarmantes. Por ejemplo, la historia conocida señala que fueron más de 400 las masacres llevadas a cabo por todos los frentes del Bloque Norte en la Región Caribe, de manera exacta en los departamentos Atlántico, César, Magdalena y La Guajira, con un saldo de más de 1.600 muertes. Solo las víctimas del paramilitarismo que hizo presencia en la Región Caribe durante casi una década podrían describir con absoluta certeza y exactitud el dolor que les causó esa maquinaria de la muerte que les arrancó de sus entrañas no solo a sus seres queridos, sus bienes y sus tierras, sino la esperanza de seguir tejiendo sus sueños en lo que les queda de vida.

A partir del tercer capítulo entramos en materia con los pueblos que fueron escenario de la barbarie. La historia comienza con Los Brasiles (corregimiento de San Diego, Cesar). Allí, la vida a los habitantes se les comenzó a torcer a principios de los años 80, cuando por las montañas comenzaron a rondar cuadrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En este capítulo se recuerda, con crudeza, los aborrecibles hechos que en un lapso de 13 años dejaron 35 muertes violentas en manos de los paramilitares.

“Me parece como si fuera ayer cuando vi a los perros correr, ladrando despavoridos, y a las gallinas anunciando con su cacareo la tragedia que se avecinaba. Supimos después que habían matado a Libardo Trejos Garrido, un vecino muy apreciado”, recuerda Abel Montes Fuentes, quien a sus 100 años, es el morador de más avanzada edad que reside en El Salado (Bolívar). Él fue uno de los testigos de aquel aciago febrero del año 2000 que dejó 60 muertos. Lo que pasó en ese corregimiento está condensado en el cuarto capítulo.

Registran las frías estadísticas que la noche del 3 de abril de 1988 –Domingo de Resurrección, para ser más exacto- ocurrió la primera matanza de personas, por parte de paramilitares, en la Región Caribe Colombiana.

Pasadas las 10:30 p.m., en la finca La Florida de Mejor Esquina, jurisdicción de Buenavista (Sur de Córdoba), 27 personas que disfrutaban de un fandango amenizado por una banda musical fueron brutalmente asesinadas por 15 hombres uniformados con prendas militares, armados con fusiles que irrumpieron en la estancia disparando a diestra y siniestra. Ese hecho se registra en el quinto capítulo.

Gran parte de Colombia y el mundo supo de la existencia de Chengue, pocas horas después de aquel aciago amanecer del 17 de enero de 2001, cuando cerca de 60

paramilitares, a punta de garrote, machete y balas, asesinaron con sevicia a 28 hombres, todos campesinos, residentes en ese corregimiento no mayor de cien casas, perteneciente a Ovejas (Sucre), región de los Montes de María. El sexto es un capítulo estremecedor que revive la desaparición de todo un pueblo.

En el séptimo capítulo, habitantes de El Cafetal, el barrio más antiguo y populoso de Villanueva (La Guajira), reconstruyen los momentos que antecedieron a la masacre de 12 jóvenes, en la madrugada del 8 de diciembre de 1998 en diferentes puntos de ese sector. ¿Guerrilleros? ¿Informantes? ¿"Física envidia"? No se sabe con exactitud cuál fue el motivo por el que les segaron la vida a esos 12 jóvenes.

En el octavo capítulo se reconstruye la masacre de cinco campesinos residentes de Cieneguita, una de las ocho comarcas rurales que posee el municipio de Repelón (Atlántico). Astrid Barrios Anaya, hermana de una de las víctimas, evoca cómo era la vida en el pueblo antes de que la violencia arrasara con la paz.

El último capítulo constituye una especie de recapitulación de lo que fue la caravana del terror que se vivió en el corregimiento de Nueva Venecia en la Ciénaga Grande de Santa Marta (Magdalena) entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de noviembre del año 2000, cuando un comando de 60 hombres a bordo de cinco lanchas mató a bala, machete y puñal a 40 pescadores por orden de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, por ser presuntos colaboradores de la guerrilla del ELN.



El Periodismo

tributa la memoria de las víctimas



Las víctimas y el país en sí mismo necesitan conocer la verdad sobre el conflicto armado. La verdad garantiza un acceso necesario a la justicia y es un elemento clave para la reparación. El que las víctimas conozcan por qué su vereda, finca o caserío fue escenario de una masacre, por qué sus familiares, vecinos o amigos fueron señalados y asesinados y por qué ahora son desplazados en una tierra extraña padeciendo las dificultades de la

pobreza y la falta de oportunidades, son parte de su propio proceso de perdón, sanación y garantía para recuperar sus derechos como ciudadanos.

“La Guerra no lo agota todo, crónicas sobre masacres y desarraigos” recoge en siete crónicas la memoria colectiva contada de viva voz por los sobrevivientes y testigos del conflicto que dan cuenta de las características esenciales de los diversos hechos de violencia perpetrados por grupos armados al margen de la ley, en algunos casos ya comprobados, con la complicidad silenciosa del Estado o las fuerzas militares.

¿A quién le corresponde atender o enfrentar estos tipos de violencia? Podemos decir que son muchas las instancias sociales y gubernamentales que guardan esta responsabilidad y los medios de comunicación de masas no son ajenos a ello, dado que por ejemplo la información que tienen los ciudadanos sobre temas como el conflicto armado interno que vive Colombia y toda la problemática que este proceso ha generado durante más de 50 años se le debe en gran medida a estos. Es a través de los periodistas que se socializa la realidad social y basado en ello las comunidades deciden qué es prioritario y qué no.

La radio, la televisión, la internet y la prensa son “consumidos” por todos y a través de ellos se muestra una realidad que condiciona las representaciones que sobre la misma tienen las personas. En otras palabras, son los medios masivos de comunicación los que soportan las realidades sobre las cuales la sociedad establece sus prioridades para pensar y elaborar su desarrollo. (Morales & Herrera, 2009, pp.14- 67) .

Colombia es un país que podría decirse siempre ha estado en guerra. La historia da cuenta de ello. Los diferentes conflictos vividos, y los actos de paz que les han continuado, son sucesos para mantener fijos en la memoria de manera que garanticen la no repetición de los mismos. La violencia vivida en los años 50 o en los años 60 no podrían ser recordados por los colombianos de no ser por el trabajo de documentación de estos hechos realizados por investigadores como Orlando Fals Borda, e igual suerte pueden correr todos aquellos eventos del conflicto armado de las últimas décadas.

En Colombia, explica Reyes (2009), la violencia ha sido usada como recurso para presionar reformas sociales, para impedir las, para imponer o rechazar dominios. (Morales & Herrera, 2009, p.20)

Colombia parecer ser un país olvidadizo.

El conflicto armado en Colombia tiene unas raíces muy profundas, que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años 60. A la violencia que caracterizó las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo XIX hasta la época del Frente Nacional (1958-1974), hay que añadir la represión contra cualquier opción política alternativa. Así, la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros de los años 60 y 70, entre ellos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos nacidos en 1964 y que en la actualidad cuentan con unos 10.000 y 3.000 efectivos, en ese orden respectivo. La violencia se agravó con la aparición a principios de los años ochenta de los grupos paramilitares, en especial las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para llevar a cabo la lucha contrainsurgente. A este contexto de violencia hay que añadir el fenómeno de la producción y exportación de droga y el reciente surgimiento de nuevas estructuras paramilitares vinculadas al narcotráfico, que ha hecho más complejo el conflicto donde la población civil es la principal víctima (Fisas, 2010, p. 93).

Colombia es un país en el que la muerte violenta de muchas personas a diario no despierta un nivel de resistencia y solidaridad ciudadana, por ello es urgente empezar a tener intacta la memoria. ¿Para qué le sirve al país reconstruir la memoria del conflicto? ¿De qué le sirve a las víctimas esta memoria y cómo su memoria le aporta a la historia?

La memoria y la verdad

Recordar, no para revivir lo sucedido, sino para entender por qué pasó e identificar los elementos que garanticen la no repetición de los hechos es el reto de la memoria histórica, sobre todo frente a las violaciones de los derechos humanos.

El conflicto armado colombiano protagonizado por los actores denominados ilegales o al margen de la ley ha suscitado numerosos hechos de violación de los derechos de los colombianos considerados como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Desapariciones forzadas, masacres, muertes selectivas, señalamientos, desplazamientos forzados, el despojo de bienes, abusos sexuales, lesiones personales, son algunos actos violatorios de los que fueron objeto

campesinos, afrodescendientes, indígenas, niñas y niños, mujeres, líderes sindicales, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y miembros de la justicia que también se convirtieron en objetivos militares por parte de estos grupos.

Estas acciones no sólo marcaron la vida de esta población vulnerable, sino de la población en general, aumentando los cordones de miseria en las ciudades, abandono del campo, disminución de la producción rural, pérdidas de tierras y el establecimiento de una justicia paralela a la resolución de los conflictos.

Como lo viene planteando el sociólogo investigador de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta, Edimer Latorre Iglesias, los desplazados son los seres humanos a los que se les posterga históricamente sus derechos como ciudadanos de un mundo moderno:

Además de perpetuarse como aplazado histórico al no recibir los beneficios de la ciudadanía moderna y del proyecto de modernidad, y de vivenciar la forma cómo diversos grupos entienden la materialización del proyecto de modernidad, y de ser víctima de la violencia y de la espiral de la miseria, el desplazado, en el marco de la globalización deviene en infraclase y en consumidor fallido, debe cargar con el estigma, con la protuberancia social entendida en términos goffmanianos de ser marcado como desplazado, de ser invisibilizado, fichado, registrado, nomencado y rotulado. Aunque lo más grave de todo es la pérdida de sus derechos. ¿Pero qué puede perder él que nunca ha tenido nada? Así suene utópico, el aplazado-desplazado posee un marco normativo emanado de visiones coyunturales y de ayuda humanitaria (Latorre, 2009, p. 38).

Por ende, Colombia requiere con urgencia acciones que conlleven a una solución del conflicto interno, pero de manera estructural, no superficial; y a que sus víctimas accedan al derecho de saber y al derecho inalienable a la verdad y que el Estado garantice el deber de recordar o deber de la memoria.

“Después de muchos debates, la sociedad colombiana aceptó la implementación de lo que se ha denominado un esquema transicional de justicia (la Ley de Justicia y Paz, 975 de 2005), no obstante la vigencia del conflicto y el hecho de que sólo uno de los grupos armados organizados al margen de la ley, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), haya aceptado el mismo. Se asume que dicho sacrificio es admisible, si con ello se avanza en la construcción de un proceso de paz” (Procuraduría General de la Nación, 2008, p. 12).

El derecho de la víctima a saber se enmarca en una dimensión individual en la cual:

(...) independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima (Conjunto de principios para la protección y la promoción de los DDHH, 2005).

Entre tanto, el derecho inalienable a la verdad pertenece a una dimensión colectiva, que implica que los pueblos conozcan la verdad.

(...) acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones (Conjunto de principios para la protección y la promoción de los DDHH, 2005).

El saber y la verdad es un derecho que atañe a las víctimas. Entre tanto, la memoria es vista como un deber del Estado que debe preservar los archivos, documentos, pruebas, estudios relativos a las violaciones de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario que conlleve a propiciar y facilitar el conocimiento de estos actos.

El Estado garantizará este deber mediante:

“...la conservación de los archivos, el establecimiento de restricciones a posibles tesis revisionistas y negacionistas, la conservación de la memoria y la divulgación de la verdad, como formas de reparación a las víctimas y la preservación de la memoria histórica (Procuraduría General de la Nación, 2008, p. 37)”.

La función de las memorias

“La memoria es una actividad subjetiva, que se realiza en un momento o periodo presente. Consiste en dar sentido a acontecimientos del pasado – sea pasado vivido por una persona o grupo, o transmitido por otros como parte de la tradición o de las creencias compartidas” (Molano, 2001, p. 29).

El concepto de memoria debe ser situado siempre en los individuos, quienes tienen el derecho a conocer y a dar a conocer su propia historia, por ello la reconstrucción de memoria en el marco de un conflicto adquiere unas condiciones de orden político y social.

La memoria disminuye la polarización de las versiones que a la fecha eran verdades absolutas “pues la búsqueda de justicia para las víctimas precisa oponerse a la imposición de una memoria política, la de los vencedores (...) que legitimaría los actos cometidos. (CNRR, 2009, p. 35).

También es una práctica social, cuya batalla se enmarca en evitar las exclusiones, las supresiones y las autocensuras contribuyendo con ello a validar y repetir acciones vergonzosas de las comunidades o los individuos que pusieron en vilo su supervivencia.

La memoria también se refiere a un:

“Acto o proceso de rememoración o evocación – ya no individual sino colectivo – puede haber rememoraciones compartidas por un conjunto de individuos que con frecuencia se constituyen en grupo precisamente debido a ello, con lo cual aparece una dimensión colectiva de la memoria”. (Exaverría, 2006, p. 223).

Dimensión que conlleva un conocimiento histórico que emana de manera contra hegemónica en una lucha para evitar el olvido:

El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones, con el fin de preservar del olvido la memoria colectiva y evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas (Procuraduría General de la Nación, 2008, pp. 174-175).

O como lo plantea Ruiz:

En el mundo entero hay una explosión de la memoria. Prácticamente a todo conflicto lo ha seguido una comisión de la verdad, un tribunal de guerra o una racha de testimonios difundidos por todos los medios disponibles

en el mundo moderno. En Sudáfrica se televisaron los actos de verdad y reconciliación donde los victimarios pedían perdón a sus víctimas, en un modelo cuestionado por la ausencia de justicia que representó. En países como Argentina y Perú, que tuvieron comisiones de la verdad, hoy viven procesos de justicia tardía. La imagen del anciano general Videla sentado y dormitando en su silla ante un tribunal argentino que lo acusaba de crímenes atroces no puede ser más paradigmático de aquel viejo adagio de que el pasado no perdona. España, que había optado por el silencio y el olvido, hoy está reabriendo su pasado con todo el debate político que ello implica. (Ruiz, 2010, parra 2).

Recuperar y preservar la memoria es una necesidad política que ayuda a garantizar un estado de democracia con un alto nivel de responsabilidad para evidenciar los errores y analizar los hechos de los integrantes del conflicto, pero que también garantiza que se den a conocer las otras verdades, aquellas silenciadas por la guerra misma y cuyas versiones justifican las atrocidades de sus hechos.

“Los actores armados de uno u otro lado buscan instaurar sus versiones del pasado como verdades absolutas y presentan sus intereses particulares como demandas patrióticas o revolucionarios – populares. En este afán de control de la historia de la memoria, los actores del conflicto manipulan las versiones sobre lo ocurrido para justificar sus acciones y estigmatizar las interpretaciones políticas y sociales que le son adversas (CNRR, 2009, p.35)”.

Iniciativas de memorias

Hoy podemos encontrar un interesante trabajo académico e investigativo sobre la memoria, uno de ellos es el Banco de Buenas Prácticas para superar el conflicto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto se puede asimilar con una bóveda virtual que atesora experiencias concretas que están dirigidas a superar el conflicto armado en Colombia. Es decir, el Banco acumula conocimiento colectivo y lo convierte en un bien público en la medida en que todas las personas que quieran contribuir en este propósito pueden acceder a éste. (...) Las prácticas inscritas en el Banco son acciones, programas o proyectos que en diversos grados y modos contribuyen a ponerle fin al conflicto, disminuir sus efectos mientras dura y sentar las bases para una paz firme y duradera (BPSC, sf. p. 1).

Desde la CNRR podemos encontrar un significativo esfuerzo por realizar unos completos informes sobre las memorias de hechos violentos ocurridos en Trujillo, El Salado, Bojaya, Segovia, la Rochela, Bahía Portete y memorias del despojo de tierras y resistencia en el Caribe colombiano. También se destaca la producción de “una herramienta pedagógica que ofrece instrumentos conceptuales, metodológicos, éticos y psicosociales para que desde distintas voces y lugares de la sociedad, se impulsen procesos autónomos locales y regionales de esclarecimiento de la verdad y construcción de las memorias” (CNRR, sf. p. 1). Este documento, *Recordar y Narra el Conflicto*, entrega los elementos para que cualquier persona pueda formarse como gestor de memoria.

Las Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh- recomendaron en la última década del siglo XX al Estado colombiano garantizar el derecho a la verdad, la memoria, la justicia y la reparación a las víctimas del conflicto armado. En este sentido se destacan las siguientes como experiencias significativas que dieron cumplimiento a este mandato.

◇ La Comisión de Investigación de los sucesos violentos ocurridos en el municipio de Trujillo (Valle) entre finales de 1988 y principios de 1990. Como resultado de este trabajo realizado entre 1994 y 1995 se presentó un informe aceptado por la CIDH, así mismo “el presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, acepto la responsabilidad del Estado por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los sucesos violentos de Trujillo, lo mismo que por la deficiente actuación de las autoridades judiciales y disciplinarias que investigaron los hechos” (Procuraduría General de la Nación, 2008, p.106)

◇ El Comité de Impulso para la administración de justicia en relación con los hechos de Los Uvos, Caloto y Villatina, creado mediante decreto 0318 del 15 de febrero de 1996. En este caso, el Estado Colombiano reconoció su responsabilidad ante los hechos ocurridos y se realizó una reparación individual y colectiva a las familias de las víctimas.

De parte del Estado Colombiano, también han surgido iniciativas que han contribuido a la identificación de la naturaleza del conflicto colombiano, estos son:

◇ La Comisión investigadora de las causas y situaciones presentes de la violencia en el territorio nacional.

- ◇ La Comisión de estudios sobre la violencia; la Comisión de superación de la violencia.
- ◇ El Informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales.
- ◇ La Comisión de la verdad sobre el Holocausto del Palacio de Justicia de Bogotá del 6 y el 7 de noviembre de 1985.

“Dentro del conjunto de las experiencias de recuperación de la memoria, de lucha contra la impunidad y de reivindicación del derecho a la verdad deben reconocerse las impulsadas por la sociedad civil, las cuales, en su gran mayoría – producto, entre otras razones, de la naturaleza del conflicto armado interno y de la debilidad de los partidos políticos para representar los intereses sociales – han sido promovidas por el movimiento de derechos humanos (Procuraduría General de la Nación, 2008, p.117)”.

Algunas de estas iniciativas son:

- ◇ Tribunal Permanente de los Pueblos, creado en 1979, ha sesionado en dos oportunidades en Colombia, la primera en 1989 luego en el año 2008.
- ◇ El Proyecto Nunca Más es un esfuerzo de un conjunto de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, apoyado solidariamente por organizaciones también no gubernamentales de otros países, dirigido a salvaguardar la memoria de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia durante el último e inconcluso ciclo de violencia, que se inicia en 1965. (Colombia Nunca Más, 2001, párras 2-5)
- ◇ Comisión para la búsqueda de la verdad en los hechos de Barrancabermeja.
- ◇ Programa TEVERE (Testimonio Verdad y Reconciliación), cuyo objeto es “visibilizar e interpretar la realidad sobre la situación de derechos humanos y el DIH, desde la mirada de la Iglesia, con el fin de aportar al proceso de reconciliación nacional, a partir del esclarecimiento de la verdad en la recuperación de la palabra de las víctimas y la reconstrucción de la memoria histórica.” (Pastoral Social, sf, parra 5)
- ◇ Los Indígenas Kankuamos, han registrado historias de vida en un texto denominado Hoja de Cruz, memoria histórica de los impactos del conflicto armado en el Pueblo Indígena Kankuamo.
- ◇ Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR). Quienes desde el año 2002 han implementado estrategias de reconciliación y no violencia.

◇ Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, creado en el año 2005, busca “consolidar un movimiento nacional participativo en el que trabajemos en torno a descubrir, denunciar y erradicar para siempre las estrategias, métodos y modelos criminales desarrollados por el Estado, que se pretende perpetuar por medio de la impunidad. (Movice, 2004, parra1).

La memoria en el Caribe Colombiano

Hablar de la Memoria en el caribe Colombiano implica tener siempre de referente *La Historia Doble de la Costa* (Mompox y Loba, El Presidente Nieto, Resistencia en el San Jorge y Retorno a la Tierra), obras con la que Orlando Fals Borda valida una nueva forma de investigación y documentación denominada IAP (Investigación, Acción, Participación). Ampliamente criticada en sus inicios, la forma como el maestro Fals Borda desarrolla una metodología incluyente en el que da a conocer una historia social, política y cultural en la cual los protagonistas, blancos, campesinos, negros, indígenas, la población común, entregaron su valiosa memoria oral, propiciando un referente para identificarnos como caribeños.

Antes de ello, se encuentra también la obra del académico José Concepción Alarcón: “*Compendio de historia del Departamento del Magdalena desde 1525 hasta 1895*”. “El texto abarca 370 años historia del Departamento, que va desde la fundación de la ciudad (1525) hasta 1895, en el que el autor describe varios hechos acontecidos en el Magdalena entre ellos la Guerra de ese año (Rey Sinning, sf. p.1)”.

Por otra parte, las memorias de las masacres perpetradas por las autodefensas en pueblos de la región Caribe se ha logrado reconstruir con las versiones de los desmovilizados ex jefes paramilitares, la Fiscalía, algunos investigadores sociales y periodistas interesados en desenterrar la verdad han acudido a las denuncias de los familiares de las víctimas, a los archivos de prensa y a los procesos que cursan ante la justicia ordinaria.

El Sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano desde hace más de 30 años ha investigado sobre el tema de la violencia en Colombia, especialmente sobre la presión que ejercen los grupos armados sobre las comunidades

campesinas y los desplazamientos forzados a los que se han visto obligados ante la desidia oficial.

El paramilitarismo es una vieja estrategia de un sector poderoso del establecimiento, que ha contribuido a impedir que prospere una salida civil al conflicto armado. En Colombia casi todo campesino puede decir que su padre o su tío, o su abuelo fueron asesinados por la fuerza pública, por los paramilitares o por la guerrilla. Es la diabólica inercia de la violencia, que desde antes de 1948, año del asesinato de Gaitán, ha dejado más de un millón de muertos (Molano, 2001, p. 13).

En su libro *Ahí les dejo esos fierros* (2009) Molano retrata seis historias de vida desgarradoras, historias de desmovilización, reencuentros y desarraigo; desde la contradicción de la selva hasta la soledad del despojo. En esta obra el autor les da voz a los personajes inmersos en el conflicto armado que vive el país para desentrañar los orígenes y las más profundas realidades y motivaciones de los distintos procesos de desmovilización y reincorporación a la vida que han tenido y tienen lugar en Colombia.

Verdadabierta.com, paramilitares y conflicto armado en Colombia es una página web que se presenta como una apuesta a la reconstrucción de la memoria desde el periodismo. Surge en el año 2008, como un proyecto de Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la revista SEMANA. A este proceso se han sumado Sipaz, La Sonora, la Fundación Friedrich Ebert- Fescol y la Fundación Avina, cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canadá y la Fundación Open Society-Soros Foundation.

Verdadabierta.com busca servir de fuente abierta al servicio de todos los demás medios de comunicación del país, que les brinde información organizada y fácil de acceder. Se llama Verdad Abierta porque es un sitio que invita a sumar y contrastar versiones, a perfeccionar y ampliar junto con periodistas, investigadores, activistas sociales y comunidades, el conocimiento del fenómeno paramilitar en todas sus dimensiones: la historia, los protagonistas, los cómplices, las víctimas, la lógica económica y política detrás de éste. (Verdadabierta.com, sf. parra 3).

La comunicación para el cambio social también viene haciendo sus aportes a la memoria. La herramienta audiovisual (cine, video o documental) realizados por expertos o por las propias comunidades ha permitido contar lo que hasta

hace décadas era incontable; ha permitido retratar los hechos y exorcizar los miedos del silencio obligado. Un ejemplo de ello, son los documentales de la Escuela de Narradores y Narradoras de la Memoria de la Serranía del Perijá y los Montes de María^[1], integrados por mujeres, jóvenes, niños, campesinos, Afrodescendientes, de estas dos regiones, los cuales durante algo más de dos años iniciaron un proceso de reconstrucción de memoria y de aprender a contar de manera audiovisual sus historias de guerra, esperanza e identidad.

Con la Ley de Justicia y Paz, la sociedad colombiana ha tenido la posibilidad de conocer, a través de los testimonios de los ex jefes e integrantes de los diversos grupos paramilitares la verdad sobre los crímenes que cometieron y con ella también se ha dado pie a que las víctimas hablen sobre los hechos.

La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación pudo establecer, en un informe elaborado con base en las versiones libres de los paramilitares desmovilizados, los testimonios de las víctimas y en investigaciones judiciales, que los años 1996 y 2005, las Autodefensas Unidas de Colombia a través del Bloque Norte, cometieron trescientas treinta y tres masacres en los departamentos de Atlántico, César, Magdalena y La Guajira, con un total de 1.573 víctimas hasta el momento.

Entre los centenares de hechos documentados hasta la fecha por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación se destacan la masacre de Nueva Venecia o El Morro, cometida por un grupo comandado por alias ‘Esteban’ o ‘09’ el 21 de noviembre del año 2000 contra los habitantes de los pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande del Magdalena.

El informe de la Fiscalía precisa que el mayor número de masacres documentadas hasta ahora ocurrieron en el Magdalena con un total de 127 y 609 personas asesinadas, seguido por Cesar con 123 masacres y 605 víctimas, La Guajira con 71 hechos y 311 víctimas y Atlántico donde habrían perpetrado 12 masacres y 38 víctimas. “La mayoría de los hechos documentados se trata de homicidios

^[1] Estas Escuelas surgieron en el convenio establecido con el Movimiento por la Paz, MPDL, la Corporación de Desarrollo Comunitario CDS, De Justicia y el Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) en el marco del Proyecto “Apoyo y protección a la población afectada por el conflicto interno y asistencia y acompañamiento de las víctimas y sus asociaciones, en su proceso de restablecimiento y reparación de acuerdo al marco de derechos recogidos en el ordenamiento jurídico colombiano”.

colectivos en los que fueron asesinadas más de tres personas, pero también cometieron muchas en las que fueron asesinadas cinco y seis personas, 12 y 11 casos respectivamente”, subraya el informe oficial.

Para finalizar este recorrido es importante señalar el excelente trabajo de reconstrucción de la memoria de las víctimas de la violencia que ha realizado el grupo de investigación Comunicación y Sociedad a través de su línea de investigación Marginalidad y Medios, de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda, Seccional Santa Marta.

Particularmente es de resaltar el exhaustivo trabajo de investigación cualitativo, desarrollado por Latorre, Camargo, Blanco, (2010), donde a través de testimonios de las víctimas se puede encontrar la resiliencia, es decir, la reconstrucción interior necesaria para auto empoderar a las víctimas y posibilitarles una visibilización en un entorno político y mediático que propende por su invisibilización. Como lo señalan en su trabajo:

“De ahí la importancia de des-victimizar y de trascender la condición misma de víctima. Empoderar a la víctima a través de sus propios relatos para que sea capaz de asumir su condición y a partir de ella proyectarse y reinventarse a sí mismo, es decir, hacer resiliencia a través de los relatos de la memoria (Latorre, et al. 2010, p. 38)”.

La crónica, narrar para recordar

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de conocer qué ocurre a su alrededor y más allá de dónde se pierde su mirada, pues ante la incertidumbre no es posible crecer ni desarrollar su inteligencia. Una de las formas que la sociedad se inventó para tener a sus miembros informados de lo que pasó, está pasando y pasará es el periodismo, el sistema que le resume la realidad a los seres humanos, entregándoles información de interés y veraz.

El escritor argentino Tomas Eloy Martínez define el periodismo como el instrumento para pensar, crear, ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta. Y una de las formas de convertir al periodismo en ese instrumento que ayuda al hombre a ser más feliz y a tomar decisiones acertadas que lo hagan más libre e independiente, es mediante la narración de

la realidad social que lo rodea, y de allí la importancia que retoma el Nuevo Periodismo y su géneros narrativos.

Cada ciudadano colombiano debe volver su mirada y sus oídos para reconocer y escuchar a sus víctimas. El periodismo cumple a cabalidad esa función y otorga a las víctimas del conflicto un reconocimiento público que contribuya a la reparación de su sufrimiento, pues al olvido que ya padecían antes de la guerra, se suma al olvido que llegó posterior a ella, aumentado por el sufrimiento de la pérdida.

En el prólogo del libro de crónicas ‘Nada es mentira’ del periodista barranquillero Heriberto Fiorillo, Tomas Eloy Martínez define al género periodístico de crónica como el único territorio donde combaten con armas iguales la realidad y la imaginación, la destreza verbal con el lenguaje voluntariamente descuidado. “El sello de la calidad de una narración periodística está en la fidelidad de los hechos y ella se demuestra en un relato capaz de transmitir una reconstrucción del suceso cercana a la verdad y afectada por cabos sueltos, historias sugeridas, asuntos inexplicables” (*Hoyos, 2009, p.15*)

Por su despliegue de profundidad y de creatividad estilística, pero también por el criterio informativo que demanda, la crónica es uno de los géneros periodísticos más exigentes. “Para dominarlos es preciso combinar ciertos dotes de escritor con habilidad de investigador” (Velásquez, Gutiérrez, Salcedo, Torres & Valderrama, 2005, p. 91).

La narración en la reconstrucción de memoria

Reconstruir la memoria requiere de un cuidadoso proceso de preparación por parte del investigador, en el cual las herramientas que utilice para la recolección de los datos y el trabajo de campo garantice, entre otros:

- ◇ El análisis de los hechos sea ajustado a la realidad, evidenciando los aciertos y errores de los sujetos participantes.
- ◇ Que incluya la diversidad de voces, miradas del proceso, y reconociendo que no es un trabajo objetivo y que por el contrario está lleno de subjetividades. La exclusión y las supresiones sólo deben quedar en los actos de guerra que llevaron al desplazamiento y al silencio de los que fueron víctimas.

◇ Que las víctimas tienen derecho a guardar silencio, y el investigador debe garantizar espacios de seguridad, protección para aquellos que deciden contar sus historias que serán incluidas en documentos públicos.

◇ Frente a los horrores vividos, muchas de las víctimas aíslan recuerdos específicos; otras producen “bloqueos” psicológicos o inconscientes de los hechos traumáticos de la violencia vivida. Muchas recuerdan con claridad lo que les ha sucedido e incluso lo llegan a comentar con sus seres allegados pero deciden guardar silencio frente a extraños porque no quieren recordar ni sumirse de nuevo en el sufrimiento, en el sentimiento de vergüenza o de enojo. (CNRR, 2009, p. 51).

Teniendo en cuenta las características del proceso de memoria, el diseño metodológico que guió la producción de estas crónicas fue la perspectiva narrativa, enfocada en la descripción de hechos humanos y sociales ocurridos en los pueblos donde se registraron masacres y desplazamientos masivos por los actores del conflicto armado en la región Caribe. El diseño narrativo es entendido desde la visión que señala que:

“... en diversas ocasiones es un esquema de investigación, pero también una forma de intervención, ya que al contar una historia ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras o conscientes (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 701)”.

El diseño narrativo se enfocó en la reconstrucción de un pasaje de una comunidad, entretejiendo las historias de vida de varios individuos. Se realizaron recorridos y accedieron a documentos, informes, investigaciones previas y procesos judiciales que sustentan con datos jurídicos, aspectos anteriores o posteriores al hecho narrado, permitiendo que la narración incluyera una cronología de experiencia y hechos que en algunos casos presentan una perspectiva a futuro de las víctimas.

Para la presentación de las narraciones, el género seleccionado fue la crónica, cuyas características narrativas permiten ajustarse mejor al objeto de la investigación, el cual es “un relato descriptivo, sin especulaciones ni fantasías, que con estilo propio y manejo original del lenguaje cuenta un hecho que ya ha sido objeto de tratamiento noticioso, lo humaniza, lo hace más vivencial e involucra al lector como protagonista (El Tiempo, 1995, pp.44-45)”.

La selección de los hechos relatados en las crónicas se basó teniendo en cuenta tres elementos:

- ◇ Los catalogados dentro de la categoría de Masacres.
- ◇ Aquellos que están presentes en la memoria de los pobladores sin importar la fecha de la ejecución y que pese a las acciones violentas que provocaron desarraigo y casi exterminio.
- ◇ Aquellas comunidades afectadas que se niegan a desaparecer y que han iniciado procesos de retorno y lucha para conservar su identidad.

“La Guerra no lo agota todo, crónicas de masacres y desarraigos” es una apuesta del periodismo para evitar la impunidad y el olvido, promover una resistencia activa ante la indiferencia pública por los hechos sucedidos, permitir que el derecho a la verdad se dé a conocer de manera masiva para evitar la repetición de los hechos violentos; generar entre los ciudadanos una actitud de inclusión por quienes fueron víctimas directas de la guerra, porque, al final, cada uno de los colombianos somos víctimas al ser testigos vivenciales o no de una guerra cuyo fin aún no se evidencia.

Pese a que son distantes los lugares en los que se desarrollaron los hechos de sangre, es posible encontrar en las narraciones de los sobrevivientes, testigos y familiares, elementos comunes. En primer lugar, las poblaciones en las que sucedieron los hechos son corregimientos o veredas en la mayoría de los casos son desconocidos por los colombianos y cuyos nombres surgieron ante la opinión pública por los medios de comunicación por los hechos sucedidos.

Por la misma característica poblacional, estas comunidades antes de las masacres no contaban con una buena prestación de servicios públicos, adecuadas vías de acceso, presencia de colegios o puestos de salud.

No se evidencia en las narraciones problemas anteriores a los hechos; los testimonios dan cuenta que los habitantes se consideraban felices, en paz, dedicados al trabajo en el campo, los cultivos, la pesca, el comercio y gozaban de sus festividades propias.

Las masacres relatadas fueron perpetradas por los Paramilitares, justificando los asesinatos en el exterminio de colaboradores de la guerrilla, que según los

victimarios ofrecían ayudas tales como alimentos, ropa, dineros o actuaban como informantes. Se observa que en la masacre de la Ciénaga Grande fueron asesinados pescadores que acababan de salir en sus canoas a pescar y se hallaban en la ruta de tránsito de los victimarios. En ningún momento fueron señalados como auxiliadores.

Salvo en dos de las crónicas presentadas en la que las víctimas fueron solo hombres, los hechos violentos no tienen distinción de sexo, edad, profesión, religión, siendo asesinados niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores. Se evidencia, también, la vulnerabilidad de la mujer en los hechos de guerra, siendo violentada física, sexual y psicológicamente.

Las narraciones no evidencian la presencia de otras formas de violencia en las comunidades antes de la incursión paramilitar.

Otro elemento común es el previo aviso de las masacres, de una u otra manera, las poblaciones recibieron información precisa de que algo iba a suceder o percibieron que en cualquier momento podría existir alguna incursión o enfrentamiento.

En los testimonios, las víctimas son mostradas como personas de bien, algunos de estos líderes y lideresas, trabajadores o estudiantes sin relación alguna con la guerrilla.

Así mismo se palpa la ausencia o respuesta inmediata de los actores de protección del Estado, sea el ejército, la policía o inspectores, exacerbando las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, quienes al día de hoy no han recibido una reparación judicial, administrativa o colectiva y ven agravado su tragedia con el aumento de la impunidad de los hechos, con autores sin identificar en algunos casos o autores de menor rango, pagando condenas irrisorias ante el tipo de violencia perpetrada.

En una apuesta por que las víctimas consigan el espacio para el reconocimiento de su sufrimiento y la injusticia por el olvido de los sucesos, este libro centra sus historias en un contexto histórico que permita conocer su importancia no sólo en la ubicación geográfica, sino en lo cultural y como identidad de la región.

Testimonio de los familiares de las víctimas del conflicto armado, de las personas desplazadas forzosamente, de las retornadas al territorio sin o con el apoyo del Estado, permiten que este sea un espacio de pluralización y democratización de los relatos sobre la guerra en el Caribe Colombiano; además de mostrar qué ha pasado con estas localidades después de años de olvido y cuáles son los planes que tienen los pobladores para permanecer en su territorio.



El Escenario que nadie imaginó vivir



Solo las víctimas del paramilitarismo que hizo presencia en la Región Caribe durante casi una década podrían describir con absoluta certeza y exactitud el dolor que les causó esa maquinaria de la muerte que les arrancó de sus entrañas no solo a sus seres queridos, sus bienes y sus tierras, sino la esperanza de seguir tejiendo sus sueños en lo que les queda de vida.

Ellas, más que nadie, conocieron en carne propia lo que quema el fuego que sale de las bocas de las ametralladoras y los fusiles; el dolor y la humillación de extraños que se aparecieron abruptamente una noche o una mañana en sus humildes feudos, y sin poder abrir siquiera la boca para preguntar o quejarse, tener que agachar la cabeza y salir con rumbo incierto a otros lugares que no conocían para seguir viviendo.

Y no sólo padecieron la herida de las balas, que cada vez cobraba más y más derramamiento de sangre, sino la incertidumbre y la zozobra de sentirse gobernadas, no por las autoridades legalmente constituidas, sino por una empresa macabra que les impuso desde cómo vestirse y hablar, hasta la manera de movilizarse y actuar con sus semejantes.

De ahí que en la región cobró vigencia una frase cruda y lapidaria que solían expresarles los jefes ‘paras’ a los moradores de los pueblos a donde llegaban, en una clara advertencia de lo que podría sucederles si se movían en la dirección equivocada: “si quiere vivir mucho, hable poquito”.

El conocimiento que tuvieron de la forma como operó este aparato militar ilegal, en la mayoría de víctimas, se mantendrá guardado también para siempre en sus mentes y en su recuerdo, pues a juicio de ellas mismas, resulta mejor dejar en manos de la justicia Divina un juicio justo, a tener que seguir atrincheradas a esa guerra oscura que todavía se mantiene latente en cada rincón que pisaron las autodefensas del Bloque Norte.

Todo esto y lo que no se conoce aún, tal vez porque las víctimas prefirieron callar para siempre o porque las mismas autoridades aún no logran hilar las pistas que conocieron, enmarcó la ruta sangrienta que trazó el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en su misión de despojar a las guerrillas de las Farc, Eln, Epl; así como a las organizaciones criminales al servicio del narcotráfico, del control territorial de la Región Caribe, considerada por los cabecillas de las autodefensas como una “mina” de alto quilate.

Y no estaban equivocadas las AUC al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. La región Caribe estaba diseñada para consolidar y fortalecer en esta una empresa paramilitar que para el año en que se produjo la incursión en la región ya se encontraba presente y operando en todo el territorio nacional.

Los intereses que atrajeron el paramilitarismo hacia el norte de Colombia no solo se centraron en la lucha contra la subversión, que ya daba latigazos a los costeños desde hacía más de tres décadas, sino en algo mucho más estratégico y cuantitativo que cubrirles las espaldas a los ganaderos y hacendados: el narcotráfico.

El conocimiento de lo estratégico que representaba la Región Norte Caribe para los mandos del Bloque Norte de las AUC estaba sustentado en que servía de corredor para el envío al extranjero de toda la coca que salía de la Sierra Nevada, amén de que en las sabanas sucreñas o bolivarenses pastaran miles de cabezas de ganado; o de la floreciente industria minera del Cesar.

Por estos factores, la incursión se hizo inminente, sin importar que al momento de llevarla a la práctica para las AUC de ‘Jorge 40’ el blanco u objetivo principal hubiesen sido las guerrillas.

Basta recordar que la lucha en la Región Caribe no se materializó cuerpo a cuerpo en la selva contra las guerrillas de las FARC, el Epl o el ELN, como se transmitía a la opinión pública, sino en los cascos urbanos, contra una población civil inermes y que al decir de las AUC hacían parte de las estructuras subversivas.

La historia conocida señala que fueron más de 400 las masacres llevada a cabo por todos los frentes del Bloque Norte en la Región Caribe, de manera exacta en los departamentos de Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira, con un saldo de más de 1.600 muertes.

Esta cifra, sin embargo, es la que maneja la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación de los hechos ocurridos entre los años 1996 y 2005, y que se desprende de los testimonios entregados por los jefes ‘paras’ desmovilizados.

El Caribe colombiano sin duda alguna es una de las regiones más golpeadas por la guerra. Además de tener uno de los índices de secuestro más alto y la presencia de 10 bloques de autodefensas y numerosos frentes de la guerrilla, también es la población que más ha tenido que huir de sus tierras y hogares por la violencia.

De hecho en un informe elaborado con base en las cifras de Acción Social, el despacho de la Fiscal Tercera de Justicia y Paz, Deicy Jaramillo comprueba que hay 676.978 personas que han sido desplazadas por lo menos una vez en

su vida en La Guajira, Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Cesar y Norte de Santander.

Bolívar con 232.423 desplazados, Magdalena con 161.960 y Cesar con 138.431, son de lejos los departamentos más golpeados por el desplazamiento. Y los peores años son entre 2000 y 2003, que corresponde a la época de las peores masacres, usurpación de tierras y desaparecimientos en la Costa. En los últimos años, aunque ha disminuido el índice de desplazamiento desde la desmovilización de los ‘paras’ en 2006, la región sigue padeciendo altos niveles con cifras que alcanzan hasta 15 mil personas anuales desterradas.

El municipio de la Costa donde más desplazados se registraron fue El Carmen de Bolívar, (Bolívar), ciudad de 70 mil personas que es la puerta de los Montes de María. Llegó a ser uno de los más prósperos del departamento, con cultivos de tabaco y ganadería, pero la presencia de las FARC y de las AUC frenó su desarrollo. Veredas de Carmen de Bolívar como El Salado o Macayepo han soportado algunas de las peores masacres de la historia reciente del país.

La Costa tiene a casi un cuarto de todos los desplazados de Colombia, donde el último promedio de Acción Social del gobierno arroja que en el país hay tres millones de desplazados y las cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), cuatro millones. El norte del país ha sido uno de las más golpeadas por los violentos. Desde los inicios de la década del ochenta registra presencia de las Farc y el Eln, en regiones como Sur de Bolívar, Montes de María, Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde principios de los noventa desde Córdoba, el sur del Cesar, la Sierra Nevada de Santa Marta los paramilitares se expandieron por toda la Costa, hasta llegar a la cúspide de su poder en la primera década de los años 2000, cuando controlaban la política, regalías, presupuestos municipales y extorsionaban gran parte del comercio.

Bolívar ha pagado el precio más alto por la guerra

El departamento de Bolívar es el que, de lejos, tiene más desplazados con 232.423 personas registradas por la investigación de la Fiscalía. Los Montes de María y el Sur de Bolívar son dos regiones donde FARC y AUC se enfrentaron por años y donde se registraron algunas de las peores masacres del país.

En 1998 se presenta un incremento significativo de la masa de refugiados, cuando las autodefensas y la guerrilla intensifican su estrategia de guerra. En 2000, 2001 y 2002 la cantidad de desplazados llega a cifras alarmantes con un promedio de 35 mil personas que salen de sus tierras forzosamente. El periodo corresponde a las peores masacres de las autodefensas en el departamento como las de El Salado, donde los “paras” asesinaron a 66 personas, o la de Macayepo, que dejó un saldo de 12 muertos.

Hoy todavía son miles las personas que se hacinan en barrios insalubres y marginales de Cartagena como El Pozón y Nelson Mandela, sin servicios públicos, construidos sobre zonas inundables y que están tomados por las pandillas juveniles.

Los municipios más golpeados por el fenómeno son El Carmen de Bolívar y María la Baja, en los Montes de María, y San Pablo, Tiquisio y Monte Cristo, en Sur de Bolívar.

Una de las situaciones más trágicas en el departamento y que resume gran parte de los problemas de su población fue el desplazamiento masivo de Mampuján, corregimiento de María la Baja.

En la noche del 10 de marzo de 2000 un grupo de paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María al mando de Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, y Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, entró al pueblo y reunieron todo el pueblo en la plaza.

Al mismo tiempo, paramilitares se fueron hasta la vereda Las Brisas, ubicada a pocos kilómetros de Mampuján. Allí mataron a 11 hombres, que acusaron de ser guerrilleros. Inculpación que fue luego negada por Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, y Uber Martínez, alias ‘Juancho Dique’, que participaron en la masacre, ante magistrados.

Después de pedirles cédulas, interrogarlos y robar electrodomésticos y muebles en las casas los ‘paras’ les advirtieron: “Si cuando volvamos mañana hay alguien en este pueblo, se muere”. Unos meses antes las autodefensas habían asesinado a 66 personas en El Salado, un pueblo a unos 20 kilómetros de Mampuján. El domingo 12 de marzo más de 1200 personas salieron de Mampuján y abandonaron sus tierras. Muchos terminaron regados en El Carmen de Bolívar, en Cartagena, en Sincelejo y en otros municipios grandes de la región.

Aunque ya han pasado 10 años desde la masacre y el desplazamiento, la enorme mayoría de los habitantes no han querido volver. Las condiciones de seguridad no están dadas, no hay electricidad, y la escuela y el puesto de salud están abandonados.

El Sur de Bolívar ha sido desde mitad de los noventa una de las zonas más violentas del país. La región es uno de los bastiones del ELN, hay presencia de los frentes 37 y 24 de las FARC y paramilitares desde 1997 bajo el mando de Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ del Bloque Central Bolívar (BCB).

Las montañas que recubren el territorio tienen minas de oro y cientos de hectáreas de coca. Es además un paso estratégico para controlar el Magdalena Medio, que conecta Norte de Santander y la frontera con Venezuela y el bajo Cauca antioqueño.

Por eso en el Sur de Bolívar ha habido innumerables combates entre ‘paras’, Ejército y guerrillas con campesinos, mineros y pescadores en la mitad. Según las cifras de la Fiscalía, cerca de 40 mil habitantes de la región tuvieron que dejar sus hogares, huyendo de las balas.

En Magdalena los ‘paras’ son los que más desplazaron

En Magdalena son 161.960 personas que abandonaron sus casas por la violencia, según arroja la investigación de la Fiscalía. El fenómeno se empezó a manifestar en 1999 y llegó a sus más altos niveles a principios de la década del 2000, llegando al tope de 35 mil personas desplazadas en 2002. La amplitud del fenómeno también se explica porque Magdalena es el segundo departamento que más desplazados ha recibido de otras regiones de la Costa.

Santa Marta, Fundación, Ciénaga, Aracataca y Pivijay son los municipios de donde más han expulsado gente. Los cuatro primeros rodean la Sierra Nevada de Santa Marta, montañas clave por los cultivos de marihuana y coca, el dominio del contrabando y los refugios naturales que ofrecen para autodefensas y guerrillas.

Estos municipios además tienen grandes cultivos de palma y de banano, en los que ha habido fuertes conflictos entre terratenientes y campesinos por la tierra y el agua. En Pivijay, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, instaló una de sus bases de

operación. Además de tomarse la administración y las rentas públicas, los “paras” desplazaron a miles de personas para repoblar la región con gente afín a ellos.

En Magdalena las masacres de la Ciénaga Grande de Santa Marta provocaron una de las oleadas más grandes de desplazados. El 11 de febrero de 2000 un grupo de 50 paramilitares asesinó a 10 personas en Trojas de Cataca, pueblo de pescadores al sur de la Ciénaga Grande. La masacre produjo el éxodo de 250 familias. Ese mismo año, el 22 noviembre 60 ‘paras’ incursionaron en Nueva Venecia, pueblo palafítico sobre el complejo lagunar.

Las autodefensas reunieron a toda la población en la iglesia de Nueva Venecia. Ahí, lista en mano, empezaron a seleccionar a varios pescadores, que señalaron como presuntos colaboradores del ELN. Al mismo tiempo los ‘paras’ iban de casa en casa saqueando, amenazando y asesinando a pobladores.

En su huida mataron a una decena de pescadores más. Las cifras oficiales señalan que los “paras” asesinaron a 40 personas en Nueva Venecia, sin embargo los habitantes creen que los muertos pueden ser más de 50, ya que muchos desaparecieron en las aguas de la Ciénaga. Tras la masacre más de la mitad de los 4.800 habitantes que tenía Nueva Venecia se desplazaron.

El reino de los paras en el Cesar

La situación en Cesar es muy preocupante ya que su población es mucho menor que Magdalena y Bolívar pero con 138.431 desplazados tiene cantidades similares de refugiados que los otros dos departamentos. Del mismo modo que en el resto de la Costa entre 2000 y 2004 la mayor cantidad de gente huyó de sus tierras para salvar sus vidas.

Valledupar, Agustín Codazzi, El Copey, Curumaní y La Jagua de Ibirico son los municipios con más desplazados. Están situados en el norte del departamento, alrededor de Valledupar, la Sierra Nevada de Santa Marta y las serranías de Los Motilones y del Perijá, en la frontera con Venezuela.

En Cesar el ELN y las FARC empezaron a delinquir a finales de los años ochenta, secuestrando y desplazando decenas de personas. A final de los noventa Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, organizaron los

primeros grupos paramilitares que fueron el núcleo del Bloque Norte de las AUC. El departamento tiene además minas de carbón y tenía en los ochentas grandes plantaciones de algodón y hoy en día miles de hectáreas de cultivos de palma, riquezas que han provocado desplazamiento de campesinos.

La escalada paramilitar, como se puede desprender de lo que se vivió en esos años de terror que aniquiló y devastó de manera despiadada a centenares de costeños de todos los estratos, estuvo enfilada en la Región Caribe en una primera fase a la conquista del territorio, a sangre y fuego.

Logrado este primer objetivo el paso a seguir fue el control político y para ello los mandos del Bloque Norte de las AUC, de manera especial ‘Jorge 40’, conminaron a la clase política costeña a su yugo. Para ello sirvieron sobre la mesa una estrategia de candidaturas únicas que los llevaría a conquistar gobernaciones, alcaldías y curules en el Congreso, como a la postre sucedió en el Magdalena, Cesar y La Guajira.

Esta fase la cristalizarían paralelo a la conquista de los corredores de la coca y el comercio internacional del alucinógeno, y para ello se escudaron en todos los flancos del litoral Caribe y obligaron a empresarios, industriales, comerciantes, hacendados y ganaderos al pago de contribuciones para el sostenimiento de la empresa paramilitar.

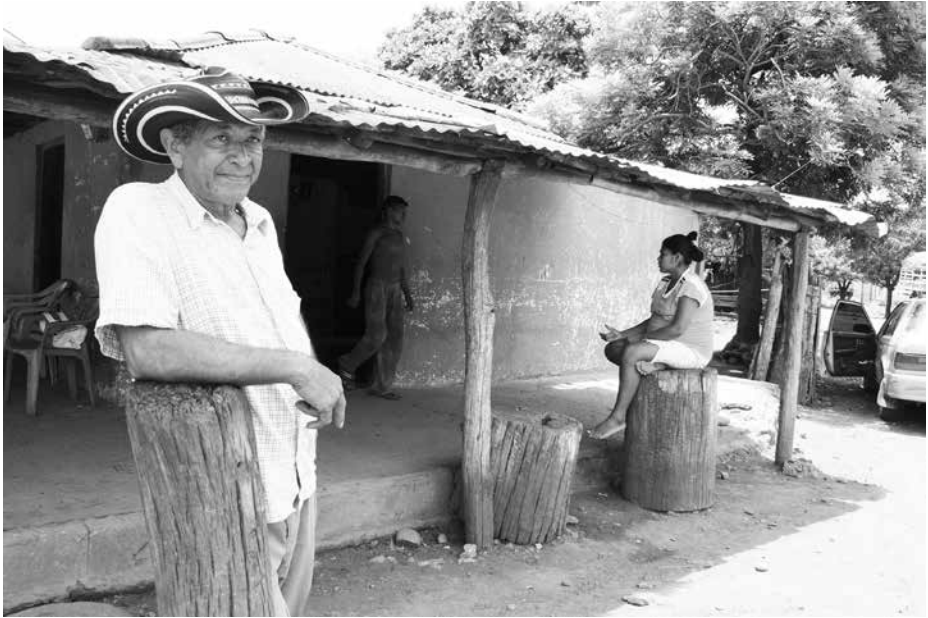
Este apoderamiento de las instituciones les valió para decidir los presupuestos y las contrataciones, de manera especial los recursos de la salud.

El derramamiento de sangre, al igual que sucedía con los campesinos y ciudadanos de las cabeceras municipales, también cubrió a esta clase política que se resistió a obedecer las órdenes de la empresa paramilitar. Los candidatos que no quisieron obedecer las órdenes fueron amenazados, desplazados e incluso asesinados.

Pero la maquinaria de la muerte también tocó fibras insospechadas: las de los niños y niñas, una población que se creía no había tenido ningún protagonismo durante la incursión y establecimiento del paramilitarismo en la Región Caribe.

Según cifras de Acción Social, el Bloque Norte de las Autodefensas reclutó no menos de 1.200 menores de edad y los enfiló en los distintos frentes en la Región Caribe.

Todo este escenario de muerte vivido en la Región Caribe aún se mantiene vivo en las mentes de quienes sufrieron la guerra en carne propia. Basta con escuchar los testimonios de los sobrevivientes de la Masacre de ‘Mejor Esquina’ (Córdoba), Chegue (Sucre), El Salao (Bolívar), Los Brasiles (Cesar) Nueva Venecia (Magdalena), Villanueva (La Guajira) y Las Tablas (Atlántico) para comprender que aún sigue siendo incierto y desconocido mucho de lo que estuvo en manos de la sangrienta empresa paramilitar de las AUC



Los Brasiles vuelven a vivir



En la finca La Recocho, en las estribaciones de la Serranía del Perijá, sobreviven quizás los 12 últimos Brasiles, árboles que alcanzan entre los 30 y 40 metros de alto y casi dos metros de diámetro, que pueden vivir por 500 años o más.

Sus grandes ramas se extienden y conforman una especie de sombrilla inesperada sobre el pabellón circundante de otros árboles, en

donde el sol pierde su fuerza. En estas tres hectáreas de bosque se puede apreciar cómo brota la vida, todo está en constante movimiento, hormigas trabajando en las raíces, pájaros multicolores que revolotean entre las ramas, y gavi-lanes de miradas incendiarias, los que apenas notan la presencia de extraños, rabiosamente abren sus alas y emprenden el vuelo hacia las montañas.

Las suaves brisas que bajan de la serranía y que recorren el valle del río Cesar son las únicas que mueven a estos gigantes que desde siempre han estado en esta región, localizada a 20 kilómetros al sur del municipio de San Diego, norte del departamento del Cesar, y que tomó el nombre de estos inmensos árboles para conformar hoy lo que se conoce con el nombre del corregimiento de Los Brasiles.

Se trata de un pueblo fundado a mediados de 1910 por Miguel Iseda, Antonio Mejía Alvarado y Cayetano Guerra, quienes levantaron sus viviendas para estar más cerca de sus plantaciones agrícolas y ganaderas. Está a 15 minutos de San Diego, su cabecera municipal, al lado de la carretera que comunica al municipio de Agustín Codazzi, en una región rica en algodón, palma, maíz, sorgo y ganado.

En un tiempo, recuerda Armando Calderón, un campesino de 60 años dueño de la finca La Recocho (cuya extensión es de 34 hectáreas), la región estuvo llena de estos gigantescos árboles que eran utilizados para extraerles tintas naturales usadas para teñir cueros y luego como leña para atizar fogones.

-Es bueno para arder, la gente lo compra para llevar para los fogones- dice Armando, quien cuida estos últimos 12 brasiles y habla de ellos como si fueran su gran tesoro, pues de esta especie solo queda el recuerdo vivo de los viejos y el nombre del pueblo, ya que la tala indiscriminada terminó con casi la mayoría de esta especie natural.

El caserío de viviendas de bahareque y techos de palma, se fue llenando de gente de todas partes de la región Caribe que miraban en esta zona una rica despensa agrícola, especialmente a mediados de los 60 cuando empezó la bonanza algodonera. Labriegos del Atlántico, Magdalena, Bolívar, La Guajira y el Cesar se asentaron en Los Brasiles y su zona rural, dando inicio a una próspera región en el norte del Cesar.

Las casas de material y techos de zinc llegaron al pueblo. Se alcanzaron a levantar 172, así mismo entraron los servicios de agua y energía eléctrica,

con ellos un colegio en donde los niños alcanzaban a cursar hasta segundo de bachillerato y un puesto de salud con enfermera permanente. La fiesta de San Martín de Loba, el 11 de noviembre, era todo un acontecimiento en la región, pues esta celebración en Los Brasiles duraba todo un fin de semana y como es un paso obligado para los que transitan entre norte y sur del departamento, permanentemente había forasteros parrandeando o visitando el apacible pueblo.

-En el año 98 la Asamblea del Cesar, homenajeó a mi papá, “El negro Calderón”, por qué fue un gran folclorista y verseador, fue una fiesta de la que aún se habla dice el viejo Armando, recordando los viejos tiempos y los días de alegría que vivieron sus paisanos y la importancia de su pueblo para la clase dirigente del departamento.

La paz y la prosperidad se paseaban por este valle, lo que permitió la llegada de los grandes hacendados y ganaderos del Cesar que aprovecharon la ubicación estratégica del corregimiento para impulsar sus agroindustrias entre los 70 y los 80s.

Pero el manto de la tragedia y el dolor un día arrojó a Los Brasiles y entre finales de los 90s y principio del 2000 en esta abundante región solo quedaron tres perros flacos y tristes que después fueron atropellados por los carros.

Los primeros señores

La vida a los habitantes de Los Brasiles se les comenzó a torcer a principios de los años 80 cuando por las montañas comenzaron a rondar cuadrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En corto tiempo bajaron a estos pueblos ubicados en las estribaciones de la serranía a impartir sus doctrinas y la ausencia del Estado sumado al empobrecimiento de muchos agricultores por la caída de los cultivos de algodón y la llegada de la bonanza marimbera a la Serranía del Perijá fue una vez más el caldo de cultivo para que el grupo insurgente se tomara la región.

Al poco tiempo, el general rumor que corría por estos pueblos olvidados se hizo realidad: Llegó el Frente 41. Frente de las FARC, que en una estrategia militar acordada con los Elenos les permitieron el acceso al territorio, mientras estos se movían hacia la Sierra Nevada de Santa Marta en busca de control de nuevas poblaciones.

Su primer golpe, recuerda el viejo Armando, fue una invasión en el sector de la vereda El Toco, área rural de Los Brasiles, donde estaban las grandes haciendas ganaderas y agrícolas. -Se tomaron una finca de unas 2.700 hectáreas ganadera y se radicaron allá, apoyados por campesinos de esa región-.

Los guerrilleros de las FARC comenzaron a sembrar el terror en la región de Los Brasiles, en donde no se movía una hoja sin el permiso del comandante de turno. Allí establecieron su gobierno y citaban a los campesinos y ganaderos a que les dieran cuentas de sus actuaciones y además pagaran el impuesto de guerra. Todo esto apoyado por algunos líderes campesinos de la zona que encontraron en los rebeldes un fuerte apoyo para hacerse fuertes y mantener el dominio.

-Uno no podía ni discutir con la mujer porque enseguida lo amenazaban con la guerrilla y de allá le traían un papel que si un volvía a fregar ya sabía lo que le iba a pasar. Nos mantenía amenazados- sostiene Armando, quien hoy no oculta el temor al hablar de los guerrilleros que conoció.

Ever Trevel, un campesino de brazos fuertes y rostro endurecido que apenas deja entrever la gorra gastada por el sol que usa, asegura que las FARC lo dejaron quebrado. Recuerda que el 4 de abril de 2003, a las tres de la tarde, ocho hombres fuertemente armados se llevaron 90 cabezas de ganado de su finca.

-Este ganao se va conmigo, usted se queda quieto y cuidado le va avisar a la ley- le advirtió un guerrillero, mientras el resto tumbaba y quemaba el rancho. -Quedé limpio, se llevaron todo el patrimonio familiar- cuenta Ever, quien aún no se repone de esas pérdidas.

En el pueblo recuerdan que de la finca del ganadero Ovidio Valle se llevaron 600 reses, de la de Luis Amaya otras 200, Blanca Ovalle 200 más, en algunos casos la guerrilla sacrificaba el ganado en los mismos potreros como advertencia a los dueños de que debían pagar la vacuna. Armando Calderón también fue víctima de estas incursiones guerrilleras. -Se me llevaron 40 reses y después que puse el denuncia estaba apurado porque me mandaron amenazar. Yo no lo quité porque dije que se lo había robado gente desconocida-. Pero las extorsiones no pararon allí, meses después regresaron y le quitaron otras 18 vacas paridas. -Me mandaron a decir que si lo iba a reclamar ya sabía lo que me podían hacer-.

Algunos de los habitantes de Los Brasiles reconocen que entre sus vecinos ya había muchos que estaban del lado de los guerrilleros y no lo ocultaban. Se encargaban de cobrar las extorsiones y llevar los recados a la personas del pueblo. Esta situación fue estigmatizando a la región como guarida de guerrilleros, lo que tendría un alto costo para la vida de muchas familias inocentes.

La presencia de los insurgentes fue espantando a los visitantes, ganaderos y comerciantes que acostumbraban visitar la región, por temor a caer en uno de los retenes de la guerrilla que a cualquier hora del día salía a la vía a imponer su Ley. El pueblo entró en decadencia y sin que nadie se diera cuenta fue estigmatizado como una zona guerrillera.

Los continuos abusos de los guerrilleros comenzaron a generar el desplazamiento de hacendados y algunos campesinos de la zona que por temor dejaron sus fincas en manos de los capataces, los campos comenzaron a empobrecerse por falta de cuidados tecnificados, ya que nadie quería ir a la zona rural para no ser víctima de una ‘pesca milagrosa’, como llamaba la guerrilla a los secuestros que cometía en las vías.

El temor recorrió también las dos calles polvorientas del pueblo y algunos, antes que cayera el sol, se iban a dormir a San Diego y regresaban por la mañana, para atender los animales, negocios como tiendas, venta de queso y leche o trabajar como jornaleros en las fincas cercanas.

–Dejé de dormir allá, antes que cerrara la tarde me venía. Les tenía miedo, pánico, yo con las armas soy cobarde,– meditó amargamente Armando, testigo de cómo la vida del pueblo comenzó a cambiar sin el permiso de los viejos habitantes que añoraban los tiempos de paz y tranquilidad, en los que hombres y mujeres se sentaban en sus taburetes de cuero de res y madera, después de terminar sus jornadas de trabajo a mirar el ocaso.

Sin embargo, lo peor estaba por pasar: a las extorsiones de la guerrilla le siguió la llegada de los grupos de autodefensas, en algunos casos apoyados por ganaderos de la región como un mecanismo para enfrentar a la insurgencia a fin de recuperar sus tierras y negocios. La poca paz y la tranquilidad que aún se respiraba fue interrumpida violentamente por el tableteo de los fusiles que dejaron una estela de sangre y dolor, viudas, huérfanos y un pueblo sumido en terror del que aún, muchos años después no se repone.

Muertes selectivas

Los grupos de paramilitares llegaron a recuperar tierras de manera violenta y amenazante, ocupadas o invadidas por supuestos guerrilleros. Un estudio pagado por la Gobernación del Cesar para conocer el proceso de desplazamiento y retorno en Los Brasiles y la vereda El Toco, señala que a principios de los años 90, mediante amenazas y la quema de sus casas, un testaferro de los paramilitares obligó a los parceleros a firmar letras de cambio y pagarés a su favor, logrando con estos documentos el embargo y remate de los bienes. Posteriormente, el Incofer adjudicó estas parcelas a nuevos beneficiarios y aumentó más la vulnerabilidad de estas familias.

“Según el diagnóstico elaborado por el Ministerio de Agricultura en los procedimientos de caducidad administrativa se observa que cuando la entidad verificó los hechos no tuvo en cuenta aspectos como la situación pública y notoria de violencia en la zona, así como la presencia de grupos paramilitares armados al margen de la ley que para la época ejercían control en la región. Predios de la vereda que en un principio habían sido adquiridos por el Incofer en los años 80 y entregados a 43 familias”, subraya el documento.

Uno de los primeros muertos que se recuerda dejó esta guerra fue a mediados de los 90, en la que fue abatido alias Luis Hernández, sindicado de guerrillero, de quien se asegura había sembrado el pánico en la zona rural. Hernández cayó en la finca Las Marías. La noticia corrió más rápido que los niños, pues aquí las personas estaban acostumbradas a enterrar a los suyos cuando la vejez se hacía presente. Algunos celebraron, pues esperaban que las cosas se mejoraran en adelante.

Fue todo lo contrario, de inmediato se inició una serie de muertes selectivas, perpetradas por hombres armados que irrumpían en las fincas y sacaban a la gente de las casas para masacrarlas. En algunos casos se las llevaban y luego aparecían los cuerpos sin vida con signos de tortura tirados en arroyos o al lado de caminos destapados.

Fue así como asesinaron a Alba, una joven de Barranquilla que manejaba una tienda en el pueblo. —Decían que era quien cobraba las vacunas de la guerrilla—, así recuerda Armando lo que se comentaba de la mujer. Hombres armados

le pegaron dos tiros en su negocio, ubicado frente a la carretera. Esta era la firma que había puesto el Bloque Norte de las Autodefensas que bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, anunciaba su llegada a esta zona del departamento para recuperar el territorio ocupado por la guerrilla.

Caridad Meza, una mujer de 48 años de edad a quien la vida parece que la hubiera golpeado y agotado desde hace mucho tiempo, recuerda que llegó a Los Brasiles hace 27 años desde Mompo (Bolívar) con su esposo. Aquí le tocó presenciar y vivir toda la violencia al lado de sus siete hijos.

–Era muy elegante, hasta que se metieron los paramilitares y acabaron con el pueblo, – comenta antes de referirse al 19 de mayo de 1.999 día de la primera masacre en el pueblo y fecha que jamás olvidará, en lo que resta de su vida.

Ese día los paramilitares llegaron a Los Brasiles y mataron a ocho personas. El comando se metió a las dos de la madrugada con lista en mano a las casas de los sindicatos de auxiliar a la guerrilla y los sacaron a la calle. –Allí mismo, los mataron. Les pegaron un tiro en la cabeza y los dejaron tirados en la puerta de su casa. –Esa madrugada por el suelo del pueblo corrió la sangre de Hernán Pinedo, Víctor Plata y su hijo Daniel Plata, y Edgar Mejía.

–Se llevaron a José Yance, Lenis Alvares y su esposo, y al señor Gaviria y los cuerpos sin vida aparecieron en la vía a Codazzi torturados, – cuenta Claridad, en medio de la tristeza que no la deja levantar la cabeza cuando recuerda los hechos.

Al día siguiente la gente esperaba el apoyo de las autoridades, pero no apareció nadie. En sus versiones los habitantes de Los Brasiles coinciden en que ni Alcalde, Policía ni Ejército, se aparecieron averiguar qué había ocurrido allá, pese a que la noticia fue registrada por todos los medios regionales y nacionales.

– El tercer día después del velorio, a algunos los enterraron en San Diego y a otros en Los Brasiles, por lo menos 200 personas salieron del pueblo-, dice Caridad quien como no tenía para donde irse se quedó sola con sus siete hijos. –Yo salí como a los 8 días, fui la última, ya me daba temor, mis pelaitos eran ya casi unos hombres. – Cuenta que junto a otras cinco familias trataron de mantenerse en el lugar, pero los nervios los estaban acabando. – A las 6 de la

tarde nos recogíamos, cuando sentíamos un carros nos entraban los nervios y solo nos quedaba rezar. –

Para Armando Calderón en ese momento no se conocía quienes eran los autores de la masacre, pues al pueblo nunca llegó una amenaza o advertencia en contra de los supuestos colaboradores de la guerrilla. –Hasta que ellos mismos (las autodefensas) lo reconocieron por la radio advirtiendo a los colaboradores de la guerrilla que seguían en la lista.–

Desde ese día comenzaron aparecer muertos todos los días en los alrededores de Los Brasiles. –Mataban permanentemente en la zona rural. Algunas veces me paraban a preguntarme por personas de bien, ellos tenía malas informaciones, yo les aclaraba quienes eran, creo que le salvé el pellejo a más de uno–, sostiene Armando, quien dice que les cogió miedo el día que se enteró del asesinato de un muchacho bueno que conocía, quien había llegado al pueblo a comprar manteca, azúcar y café. –A este muchacho sano lo mataron por no dejar, ellos dijeron que lo había matado el ejército en un combate y que se trataba de un jefe de las AUC–.

Recuerda que días después un comandante apodado Alma Grande, por ser un hombre de gran estatura y formación corporal, lo paró en la calle para preguntarle por qué le temía a los paramilitares. –Le dije que a mí también me pueden mal informar y asesinar. Me dijo camine tranquilo por donde quiera usted, que ya le tenemos su vida averiguada–. Desde ese día el viejo campesino decidió no regresar más al pueblo, se dedicó a trabajar en el parque recreacional de San Diego, tratando de olvidar todo lo que estaba pasando en el pueblo.

En esa época nadie preguntaba nada, ni mucho menos comentaba lo que estaba pasando a sus vecinos, la desconfianza comenzó a reinar entre los mismos habitantes de Los Brasiles que ya se desconocían entre ellos mismos. El pueblo había desaparecido.

La otra masacre

Se estima que entre finales de los 90 y principio del 2003 en Los Brasiles se registraron 35 muertes violentas en manos de los paramilitares. Algunos de los muertos tenían relación con las FARC, pero otro tanto cayó en esta persecución

sin saber por qué o por simple sospecha de sus verdugos. En el 2000 una nueva incursión dejó como resultado a otros siete campesinos muertos. –Asesinaron a la señora Minga, a su hijo, y un vecino y siguieron para la vía de El Toco, donde asesinaron a otros cuatro,– cuenta Caridad, quien después de ese día al igual que Armando y las otras familias que se resistían a salir.

Caridad y sus siete hijos se refugiaron en San Diego a casa de un amigo. Con el tiempo logró alquilar una casa en donde pasó todo tipo de necesidades, como quiera que estaba sola pues se había separado del padre de sus muchachos antes que comenzara la tragedia del pueblo.

En Los Brasiles las casas comenzaron a desmoronarse por la soledad. Algunas fueron desvalijadas por ladrones que se llevaron los techos de zinc, las puertas y ventanas de madera. El pueblo en ruinas tenía un aspecto fantasmal.

Los asesinatos selectivos no cesaron. Siguieron las muertes de campesinos que eran sacados de las fincas. En la hacienda Los Cotopri, donde se rumoreó que masacraron a 4 personas.

La situación de Caridad era tan complicada que debió regresar para abrir su tienda, pues sus hijos ya no tenían qué comer. “Aquí me gano la vida, y como no le debía nada a nadie decidí venir”. Cuando regresó a su rancho, no había nada. Los ladrones se le habían llevado los cerdos, las gallinas, algunos enseres y hasta la batea donde lavaba la ropa.

“Desde que regresé no me he ido más, por eso me tocó ver cuando pasan los muertos”, dice con los ojos llenos de lágrimas al recordar a sus vecinos y amigos que cayeron durante la época de la violencia.

Todo quedó solo, nadie se asomaba por las fincas. El abandono fue total, los grandes hacendados solo llegaban a mirar el estado de lo que les quedaba cuando eran acompañados por el Ejército. Ni siquiera el carro que sacaba la leche volvió a entrar. Los Brasiles habían desaparecido, sin que ninguna autoridad hiciera algo.

Los domingos, el viejo Armando Calderón regresaba a echarle un ojo a la finca y sus legendarios árboles, cruzaba palabras con Caridad, y antes de que cayera el sol se regresaba a San Diego.

La última esperanza

Desde el 2004 se inició el retorno paulatino de algunas familias, a pesar de no estar seguros de las condiciones de seguridad. El rumor de que las cosas estaban cambiando llevó a algunos desplazados con el propósito de recuperar sus tierras, viviendas y hasta la dignidad, tras permanecer años refugiados en lugares desconocidos en los que siempre fueron desplazados, extraños que nunca pudieron sentirse como en casa.

“Tomaron la decisión de volver, arriesgando su vida, porque gran parte de estas familias manifestaron no tener conocimiento sobre las condiciones de seguridad de la zona para volver; sólo rumores de que ya se podía volver los llevó a tomar este riesgo pese a lo que podían encontrarse en el camino”, señala la investigación de la Gobernación del Cesar, en Convenio de Cooperación con el Comitato Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli (CISP, 2010, p. 10). Es decir, el proceso de retorno se registró de manera individual y sin acompañamiento.

El documento subraya que de las 27 familias que fueron objeto de estudio por la investigación, 6 perdieron a uno de sus miembros en este conflicto, sólo una familia ha recibido ayuda psicológica, y ninguna han recibido reparación por la afectación del conflicto armado.

La llegada a la presidencia de la República de Álvaro Uribe Vélez y su anuncio de atacar a los grupos violentos con su programa de Seguridad Democrática, generó expectativas en la región. El nuevo gobierno entró poniendo su plan en marcha en el Cesar, llevando tropas del ejército a patrullar de manera permanente en vías y veredas que estuvieron en manos de guerrilla y paramilitares. Poco a poco, las casas abandonadas se fueron llenando de vida, la instalación de bases militares en la zona fue prenda de garantía para que muchos hacendados y campesinos iniciaran lentamente su retorno.

Armando Calderón dice que a partir del 2006 el pueblo comenzó a reconstruirse paulatinamente, a las casas volvieron a colocarles techo, puertas y ventanas; el colegio abrió sus puertas; regresaron los maestros y los estudiantes; el puesto de salud volvió a funcionar, desde esa fecha hay atención médica, el pito del camión que recorre las fincas recogiendo los cantaros de leche volvió a sonar,

y las fiestas patronales del 11 de Noviembre comienzan a tomar renombre como hace 20 años. Hay un plan de la Gobernación del Cesar para apoyar a las personas naturales de Los Brasiles que decidan retornar. Sin embargo algunos todavía sienten temor y no quieren volver.

“La gente se tomó confianza y comenzó a regresar al campo”, dice el viejo campesino, quien también reconoce algunas ayudas enviadas por el gobierno. Él y a otro grupo de pequeños agricultores recibieron ayuda por 19 millones de pesos para reactivar los cultivos de millo y maíz y mejorar el sistema de riego artificial.

“Me subsidiaron para sembrar con aspersión tres hectáreas de maíz, para comprar motobomba y adecuar el pozo”.

Ever Trevel regresó a trabajar en su finca desde el 20 de julio del 2010 y arrancó sembrando 8 hectáreas de maíz. “Me metí cuando vi que había ejército”, sostiene.

Mientras que Caridad Meza, recobró su tienda, ha recibido dos subsidios por un millón 600 mil pesos del gobierno con lo que ha podido levantar su tienda y mantener a sus hijos quienes estudian en San Diego, pero no puede olvidar a los vecinos y amigos que murieron en el conflicto, y por eso dice que todos los días de su vida se enfrenta a los quejumbrosos fantasmas que pasan llevados por las brisas que bajan de la serranía al viejo pueblo y agitan las ramas de los brasiles que aun se resisten a desaparecer en una región donde en una época vivir fue una tarea difícil.

CAPÍTULO 4



El terror golpeó dos veces a **El Salado**



Febrero 21 de 2010

“Este es el monumento a nuestros muertos”, nos señala Petrona Arrieta, con los ojos entrecerrados por el rigor de los fuertes rayos solares. La mujer, cercana a los 70 años, se persigna e inicia un rezo en voz baja. Varias personas que están ahí, desafiando los rigores de la alta temperatura, la imitan en el ritual.

El monumento, levantado en inmediaciones de la Plaza del Pueblo, es una enorme lápida simbólica en la que están los nombres de las 49 personas que fueron asesinadas a pocos metros de ahí, entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 por 450 paramilitares bajo el adiestramiento y mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; Salvatore Mancuso; Rodrigo Antonio Mercado Peluffo, alias ‘Rodrigo Cadena’, y Carlos Castaño.

Entre los nombres, Petrona nos enseña dos: Neivis y Helen Arrieta Martínez. “Eran sobrinas mías –nos dice la mujer-. Neivis tenía 21 años y Helen, 8”.

Muy cerca de la lápida está una cruz de cemento, de gran tamaño, ubicada sobre un montículo pavimentado, circular, rodeado de una pequeña reja. Debajo del redondel reposan los restos de las víctimas.

“Lo que pasó hace diez años aquí en El Salado no tiene nombre. Los ‘paracos’ llegaron y acabaron con la alegría y la esperanza de este pueblo”, agrega Petrona con el tono pausado, casi apagado, casi vencido.

Ese aciago episodio se quedó detenido en la mente de los ‘salaeros’ que fueron testigos de aquella masacre.

“Me parece como si fuera ayer cuando vi a los perros correr, ladrando despavoridos, y a las gallinas anunciando con su cacareo la tragedia que se avecinaba. Supimos después que habían matado a Libardo Trejos Garrido, un vecino muy apreciado”, recuerda Abel Montes Fuentes, quien a sus cien años, es el morador de más avanzada edad que reside en el pueblo. Él fue uno de los sobrevivientes de la masacre. A empellones, por parte de un negro armado de un fusil, fue conducido al epicentro de la barbarie. Así hicieron muchos de los uniformados con el resto de moradores que fueron sacados de sus casas.

Ya agrupados en la plaza, a menos de 50 metros de la parroquia, hombres de un lado, y mujeres y niños del otro, bajo la amenaza de los criminales que los apuntaban, al primero en seleccionar y asesinar delante de todos, fue a un hombre llamado Eduardo Novoa Alvis. Tenía 31 años y era agricultor.

“Los ‘paracos’ dijeron que Eduardo ayudaba a la guerrilla. ¡Pobrecito! Le arrancaron las orejas con un filoso cuchillo de esos con que se matan cerdos.

Como gritaba por el dolor, le metieron la cabeza en una bolsa negra; lo apretaron y empezaron a golpearlo por la barriga. Después, un guerrillero le pegó un tiro en la nuca”, recuerda Teolinda Cárdenas.

Antes de la segunda ejecución, uno de los paramilitares comenzó a manipular una tambora que había tomado de la Casa de Cultura. A ese instrumento se sumó el sonido de una gaita. Comenzó, entonces, una especie de fiesta macabra, en la que unos bailaban y otros disparaban al aire, con una expresión demencial barnizada en sus rostros.

Dice José Manuel Montes, un testigo de aquella tragedia, que tras asesinar a diez hombres más, llegó el turno de las mujeres. La primera se llamaba Neivis Judith Arrieta Martínez, y contaba 21 años.

Jalada por el cabello la llevaron desde la iglesia hasta un árbol junto a la cancha de microfútbol. La ultrajaron antes de asesinarla porque, según los ejecutores, era amante de un guerrillero de alto rango. Personas que estuvieron ahí coinciden en que le introdujeron un pedazo de palo en la vagina.

Luego siguieron Nayibe Osorio Montes, Francisca Cabrera de Paternina y Rosmira Torres Gamarra, una madre comunitaria a la que ahorcaron con una cabuya tras forcejear con un paramilitar.

La capital tabacalera de la región

Enclavado en Los Montes de María, Villa del Rosario -como es el verdadero nombre de El Salado- está ubicado a 18 kilómetros del sureste de El Carmen de Bolívar (en el norte de Colombia). Su fundación se remonta hacia 1812, dos años después de la Independencia Nacional. Fue bautizado originalmente con el nombre de Villa del Rosario.

El Salado es un pueblo pequeño, caluroso, rodeado de una espesa vegetación, con un deficiente sistema de alcantarillado. Aunque tiene casas de cemento, algunas techadas con asbesto o cinc, la mayoría de sus viviendas son de bahareque, con techos de palma. Sus calles están sin pavimentar y sus servicios de agua y electricidad son irregulares.

Al pueblo se llega -partiendo desde El Carmen de Bolívar, la cabecera municipal- en camperos, motocicletas, ciclas o a lomo de burros, mulos o caballos, por un camino destapado, polvoriento y empinado en algunos tramos. Ese camino es casi intransitable en épocas de lluvia.

Por varias décadas, ‘El Salao’ fue el pueblo más pujante, próspero y alegre entre todos los corregimientos, veredas y caseríos de la región. Allí se sembraba y se cosechaba en gran cantidad y calidad yuca, ñame, auyama, patilla, melón, ajonjolí, algodón y tabaco.

Las dos compañías de tabaco más importantes y más visitadas de los corregimientos de este amplio sector del Bolívar Grande estaban allí. Allí llegaban agricultores de otras tierras a comercializar el tabaco.

En el pueblo había un puesto de salud, un colegio de bachillerato y 33 tiendas. En la época de las fiestas de la Virgen del Rosario, en octubre, el pueblo se llenaba de gente de todas partes. Las fiestas de toros y el fandango no tenían par. Eran otros tiempos.

Abel Montes, a sus cien años de edad, es una especie de patriarca, de memoria viva. Con una lucidez impresionante para su edad, recuerda los años de esplendor de El Salado.

“Acá no había luz ni agua potable ni se nos conocía en la mayor parte del país porque ni siquiera figurábamos en los mapas. Pero éramos felices a pesar de ser un pueblo marginado. Con el tiempo vendrían la electricidad, el acueducto y el progreso. Llegarían, también, la guerrilla y los ‘paracos’, y sembrarían el terror. Todo acabaría. Fue entonces cuando nos hicimos visibles, y el planeta supo de nuestra existencia gracias a la masacre de los paramilitares”.

Los autores de la masacre

A finales de 1999, en El Avión, una finca ubicada en jurisdicción del municipio de Sabanas de Ángel, departamento de Magdalena, se planeó la masacre de El Salado, llevada a cabo entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000.

Tal afirmación es el resultado de la investigación efectuada por el Grupo de Memoria Histórica, a partir de las indagatorias rendidas durante las diligencias

de versión libre, ante la Unidad de Justicia y Paz, por los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que participaron en la barbarie, y hoy están siendo procesados, entre los que figuran Édgar Córdoba Trujillo, alias ‘Cinco Siete’, Uber Enrique Banquez, alias ‘Juancho Dique’, John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, Luis Teherán y Dilio José Romero.

Según las declaraciones de los implicados, la acción criminal -ejecutada por 450 paramilitares-, fue ideada y materializada por el Bloque Norte de las AUC, en cabeza de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, con la participación activa del sanguinario jefe del bloque ‘Héroes de los Montes de María’, Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, y el apoyo logístico de Carlos Castaño, comandante general de las AUC. De la masacre también se acusa al entonces capitán de corbeta de la Armada, Héctor Martín Pita Vásquez. La incursión dejó un saldo de 60 muertos, 52 hombres y 8 mujeres.

Carlos Castaño fue asesinado el 16 de abril de 2004 por un miembro de su misma organización; “Rodrigo Cadena” desapareció en noviembre de 2005 de la zona de distensión, en Santa Fe Ralito (Córdoba), y el vehículo en el que viajaba se encontró quemado; Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’, desmovilizados en 2005 y 2006, en ese orden respectivo, fueron extraditados a Estados Unidos en mayo de 2008.

Como consecuencia de la masacre en El Salado, la Procuraduría General de la Nación sancionó a un coronel y a un capitán de la Armada Nacional por no actuar con diligencia para contrarrestar la incursión de los paramilitares. Los implicados fueron el coronel Carlos Alberto Sánchez García y el mencionado Capitán de Corbeta de la Infantería de Marina, Héctor Martín Pita Vásquez. Ambos fueron llamados a juicio por la Fiscalía.

La Procuraduría también solicitó investigar disciplinariamente a once miembros de la Marina y a dos de la Policía Nacional.

De los 450 paramilitares que participaron en la matanza solo 15 han sido condenados, es decir el 3 por ciento. De esos 15, ninguno tiene importancia jerárquica.

La masacre de febrero de 2000 obligó al éxodo masivo de la población de El Salado, unos 4000 habitantes aproximadamente. De acuerdo con el Censo realizado por la Subdirección de Atención a la Población Desplazada -entidad

dirigida por la presidencia de la República- y la Cooperación Internacional, hasta el mes de abril de 2009, sólo habían retornado 730 personas. Muchos de los que han vuelto se han estrellado con una cruda realidad: las tierras de la región que les daban de comer fueron adquiridas por nuevos terratenientes, y sus precios actuales son exorbitantes. La hectárea que costaba 300 mil pesos hoy cuesta diez veces más. “Sin tierra, aquí es imposible vivir”, es la voz generalizada de los campesinos que han retornado.

Las secuelas de lo vivido

Ver el estado deprimente en que quedó reducido su pueblo es la dura realidad con la que siempre temió encontrarse. “Es una imagen que quisiera desterrar de mi memoria...”.

Una ráfaga de nostalgia acompaña las palabras de Edilma Cohen al contemplar la derruida casa, hoy llena de ausencia, en la que vivió toda su niñez y gran parte de la juventud, en El Salado.

La mujer fue una de las primeras desplazadas de ese corregimiento, en 1997. La fecha y las circunstancias no las olvida: 25 de marzo, dos días después de la primera incursión paramilitar que dejó cinco muertos.

“Aquel 23 de marzo de 1997, 50 uniformados con fusiles y metralletas en manos asesinaron, después de llamarlos a lista, a la profesora Doris Mariela Torres, a José Esteban Domínguez y su hijo, cuyo nombre no recuerdo, a Néstor Arrieta y a Álvaro Pérez. Nos reunieron en la plaza y nos dijeron que si en 72 horas no desocupábamos el pueblo nos rematarían a todos. Después quemaron unas casas y el supermercado que estaba contiguo a la Plaza. Con un inmenso dolor tuvimos que marcharnos con nuestros motetes. Con mi marido y mis hijos me fui para nunca volver”, dice la mujer.

Edilma Cohen y su familia fueron unas de las 7.000 personas que huyeron despavoridas del pueblo. Cerca de 4.000 retornaron tres meses después. Edilma y los suyos se abstuvieron de regresar.

Transcurrieron 12 años 5 meses y 19 días para que Edilma -al igual que varios paisanos suyos- regresara al amado terruño. Fue una visita corta, de un día: el 13 de septiembre de 2009, para escuchar el Informe *La masacre de El Salado*,

esta guerra no era nuestra, presentado por el Grupo Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

“Antes, esto era paz, alegría y prosperidad. Hoy solo nos queda el recuerdo, y eso lo puedo testificar con firmeza yo que viví aquí muchos años”, señaló la mujer.

Casi tres años después de su salida del pueblo, en su exilio forzado en un barrio marginal en el sur occidente de Barranquilla, Edilma Cohen se enteró por la radio del exterminio a que fueron sometidos más de medio centenar de paisanos suyos.

“Entonces supe que jamás volvería a vivir en El Salado”, dijo.

Como Edilma, muchos salaeros –saladeños, dicen algunos residentes en el interior del país- se lamentan de la situación del terruño.

“Esto no es ni sombra de lo que fue”, asegura Luis Guillermo Arrieta. “Las personas ríen y se divierten, pero se siente que por dentro llevan abiertas las heridas del tormentoso recuerdo”.

Quizás, motivado por ese semblante generalizado en los habitantes del corregimiento, Eduardo Pizarro Leongómez, director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, exhortó a los salaeros a que se comprometan a devolverle a su pueblo las ganas de vivir.

“Tenemos que hacer que El Salado vuelva a ser lo que fue, porque si no logramos revivirlo, entonces los criminales que los sacaron de aquí a la fuerza finalmente triunfarán. Entonces, no solo habrán matado a sus familiares, sino también su cultura”.

El clamor de los salaeros

“Al pueblo han llegado representantes de entidades del Estado y no gubernamentales, y nos hablan de proyectos y más proyectos para ayudarnos, pero todo se queda en bla bla bla, porque las ejecuciones no se ponen en marcha. A nosotros, esa situación nos atormenta”, afirma Pedro Medina Romero, representante de la Junta de Acción Comunal de El Salado.

El hombre de menuda figura esboza ese apunte en referencia a lo que considera promesas no cumplidas.

“Eso que nos pasó no se curará nunca, pero no podemos quedarnos encerrados en el recuerdo de nuestra tragedia. Tenemos que sacar el pueblo hacia adelante”, anota Armando Medina, a quien le asesinaron a su anciano padre.

“En estos momentos estamos en un diálogo político con la Comisión Nacional de Reparación –agrega Eneida Narváez, representante de la Asociación de Desplazados del Salado Bolívar (Asodesbol)-. Todavía no queremos hablar de reparación administrativa, que es lo que plantea el Gobierno. Primero que todo queremos una reparación colectiva, que es todo lo que perdió la comunidad”.

Los ‘salaeros’ tienen en sus corazones las heridas abiertas por la masacre ocurrida hace diez años.

Viven con la incertidumbre de saber cuál será su destino luego de que las tierras en la que desempeñan sus actividades agrícolas fueran compradas por personas de otras regiones, cuyos planes se desconocen.

Son golpeados por los ineficientes servicios agua potable y sistema eléctrico, y por el mal estado de la vía principal, que se vuelve crítica en época de intensas lluvias.

Pese a todo, en el interior de los habitantes prevalecen intactas la alegría y la esperanza. Así se puede percibir cuando hablan.

“Aquí nacimos, aquí crecimos, y no nos hallamos en otra parte. Tenemos que cerrar los ojos, endurecer nuestros corazones, no mirar hacia atrás y continuar para adelante. Este es nuestro destino”, afirma Darlys Cárdenas, moradora del pueblo.

“Frente a las adversidades, frente a la barbarie, nuestras únicas respuestas son la vida y la esperanza”, expresa Edilma Cohen.

“La alegría va por fuera, pero la procesión va por dentro”, señala Alberto Cárdenas, viejo habitante que en dos ocasiones debió desplazarse por la violencia. “Aquí sigo y aquí espero vivir mis últimos días”, agrega.

“Tenemos la firme esperanza colectiva de que los hechos aborrecibles que sucedieron, no volverán a ocurrir”, anota Félix Lambraño.



En Mejor Esquina

empezó la historia de sangre



Sucedió en ‘La Florida’, una amplia y acogedora casa campestre de propiedad de Elvia Martínez.

En medio de una formidable panorámica, con dos imponentes palmeras en su vestíbulo, la casa de campo estaba ubicada en la entrada de Mejor Esquina, jurisdicción de Buenavista (Sur de Córdoba).

Allí ocurrió la noche del 3 de abril de 1988 –Domingo de Resurrección, para ser más exacto- la primera matanza de personas, por parte de paramilitares, en la Región Caribe Colombiana.

Registran las frías e infalibles cifras que pasadas las 10:30 p.m., 27 personas que disfrutaban de un fandango amenizado por la banda “Tres de mayo” de Montelíbano, fueron brutalmente asesinadas por 15 hombres uniformados con prendas militares, armados con fusiles que irrumpieron en la estancia disparando a diestra y siniestra, a todo lo que se moviera, mientras proferían toda suerte de vilezas, y tildaban a sus víctimas de guerrilleros.

El despiadado aguacero de balas duró alrededor de 30 minutos, según los cálculos de algunos sobrevivientes, y esparcidas en el aire, con la dureza de muchos latigazos seguidos en la espalda, a pleno sol, quedaban las palabras de los criminales:

“Suerte para los que quedan vivos; que lloren mucho a sus muertos, partida de guerrilleros hijueputas”...

Se sabría después que mientras emprendían su retirada, en las afueras de la finca, los fabricantes de muertos asesinaron a un hombre que sería identificado como Juan Acevedo, dejando así un concluyente saldo de 28 acribillados, entre hombres y mujeres; adultos y niños.

Como dato curioso para la posteridad, ninguno de los integrantes de la banda musical fue blanco del tiroteo.

Las horas transcurrieron y los deudos, atemorizados aún, empezaban a salir del aturdimiento ocasionado por la abrupta incursión para estrellarse con su desoladora realidad.

“Esto que nos pasó no tiene nombre. En mi caso particular es inenarrable – dice José Sáenz, veintidós años después de la tragedia, haciendo un esfuerzo inocultable para no llorar-. Vi cómo mataban a mi hijo Anastasio y a varios amigos y familiares, y luego vi cómo se alejaban los asesinos en medio de burlas e ironías sin que nosotros, presas del terror, pudiéramos hacer nada. Esto es grande. No sé cómo he podido vivir desde entonces. Pasan los años, pero el recuerdo se mantiene vivo, nítido y quemante”...

Fue él quien casi cuatro horas después de la barbarie, a lomo de caballo, y tras un incesante galope de más de media hora en plena oscuridad, llegó a Buenavista y dio la mala nueva: “Unos hombres disfrazados de soldados llegaron al fandango de Mejor Esquina y mataron a tiros a muchas personas”.

Horas después se sintió en la región, el país y el mundo el sonoro impacto de la noticia. Fue un suceso que cayó como ese viento gélido que en la madrugada sacude a los pordioseros apostados en los atrios de las iglesias, o como las devastadoras olas que, sin cesar, golpean a las rocas.

El tradicional acordonamiento, como medida preventiva para el levantamiento de los cadáveres, fue algo que se obvió en Mejor Esquina. Recuerdan los sobrevivientes que en vista de la tardanza del inspector de Policía de Buenavista, Alcides Luna, quien llegó al lugar de los hechos 12 horas después, los lugareños optaron por sepultar a sus difuntos, pues éstos empezaban a descomponerse y a ser comida de gallinazos, perros y cerdos.

Los heridos, 15 en total, serían remitidos a hospitales de Planeta Rica y Buenavista. Ninguno moriría.

“A mí no me mataron porque uno de los asesinos se compadeció de que yo era lisiado de las dos piernas, en cambio ‘cosieron’ a tiros a mi burro –dice Sabino Avilés, uno de los testigos de aquella noche-. Yo era un niño que me arrastraba apoyado de las manos. Todavía es la hora que en mis noches de desvelo oigo las voces de los asesinos, diciendo que no dejaran vivos a ninguno de nosotros”. Sabino no tiene piernas. Él es uno de los casi 400 habitantes que residen en una de las 66 casas de Mejor Esquina. “Hay que saber vivir con los cruentos recuerdos. No nos queda otra. Es imposible tratar de olvidar. A mí me mataron a dos hermanos”, dice el hombre.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos por parte de los sobrevivientes, el líder del comando homicida era un individuo alto, corpulento, de piel clara. Llevaba puesto un sombrero vueltiao. Su escolta inmediato era un hombre de color, también de contextura gruesa, que llevaba en la cabeza una pañoleta. Algunos residentes del pueblo no dudaron en afirmar que ese era Vladimir Baquero, un ex guerrillero de las FARC, conocido mejor como ‘Vladimir’.

Un mar de interrogantes

Los integrantes de la banda musical, como ya dijimos, salieron ilesos. Con el tiempo se conocería que los músicos habían sido contratados en el municipio de Montelíbano por Lucho Argumedo, residente de Buenavista, con dinero girado por el entonces prestante ganadero César Cura. Ninguno de los dos asistió al fandango. Cura, acusado después de narcotraficante por el DAS de Córdoba, sería asesinado años más tarde en Santa Marta.

Aquella noche del 3 de abril, una ventana abierta de los sueños –como se le catalogaba a Mejor Esquina- se cerró de manera áspera. Hoy, casi un cuarto de siglo después, esa ventana permanece cerrada, y los familiares de las víctimas aguardan, con la esperanza resquebrajada, a que se haga justicia.

“Yo realmente creo que la matanza que hubo aquí se queda así, en la purita impunidad. No tengo la más mínima esperanza de que nos paguen a nuestros muertos”, dice Elvia Martínez, la dueña de ‘La Florida’, y hermana del entonces concejal Ruperto Martínez, presente la noche de la barbarie, y quien salió ileso, sin ningún rasguño.

Cuentan algunos sobrevivientes de la masacre que Ruperto increpó a los asesinos con un “Basta, no más; ya está bueno”. En respuesta, los agresores solo se limitaron a darle término a los disparos, sin proferir palabra alguna.

“¿Por qué el concejal Ruperto Martínez les habló así a los criminales? ¿Por qué estos no siguieron disparando? ¿Por qué no le dispararon a él como sí hicieran con otros? ¿Existía algún vínculo entre ellos?”, esos interrogantes se plantearon muchos de los sobrevivientes que, sin embargo, no se atrevieron a lanzar alguna opinión.

Lo cierto del caso es que en otras partes de Córdoba asociaron a Ruperto Martínez con los uniformados. Dichas acusaciones seguirían hasta mucho tiempo después de que el hombre, entonces profesor de matemáticas, sería asesinado en el municipio de Purísima.

“Nadie puede decir que mi hermano Ruperto haya tenido que ver con esa masacre. Eso es absurdo, pues la noche de ese macabro fandango murieron a

tiros un hermano de él y dos parientes más”, señala Gabino Martínez, hermano menor de Ruperto.

Epicentro de la barbarie

Buenavista es uno de los 30 municipios que conforman el departamento de Córdoba. Así mismo es uno de los nueve que integran el denominado Valle del San Jorge. Está ubicado en el sur de Córdoba, y a él pertenece el caluroso corregimiento de Mejor Esquina, del que está distanciado a 20 kilómetros, y al que se llega luego de transitar por un camino angosto, de tierra rojiza, cercado a lado y lado del trayecto con alambre electrificado, clavado sobre maderos secos.

El color verde vivo de la sabana; la imponentia de las bongas, ceibas y carretos; la majestuosidad de las fincas y la apacibilidad del ganado vacuno, son imágenes que alimentan la vista del viajero.

Al llegar, comprobamos que, pese a su riqueza natural, Mejor Esquina es un humilde caserío lleno de atraso, como la mayoría de los pueblos del Litoral Norte de Colombia con deficientes servicios básicos. Subsiste gracias a la agricultura y la ganadería.

Solo en 1992, cuatro años después de la masacre, llegaría el progreso, materializado en el fluido eléctrico; en la adecuación de un sistema de agua potable, y en la construcción de un puesto de salud.

“Este era un pueblo olvidado por el Estado, pero aquí la gente vivía feliz. Todavía es la hora que nos preguntamos por qué hubo esa matanza”, plantea Sabino Avilés.

Minutos antes de que los criminales repartieran fuego, en la finca ‘La Florida’ se encontraban cerca de 250 de las 1600 personas que en esos momentos habitaban el pueblo, campesinos en su mayoría. Estaban celebrando la pascua de la resurrección.

“Era costumbre del pueblo, y todavía sigue siéndolo, prender el fandango el Domingo de Gloria, en la Plaza. Pero como ese 3 de abril de 1988 había amenaza

de lluvia, se convino no realizar la fiesta a cielo abierto, sino en un recinto cubierto. Por eso se escogió la finca de la señora Elvia Martínez, hermana del entonces concejal Ruperto Martínez”, explica Silvio Sáez, sobreviviente de la masacre, quien trabajó aquella noche como mesero.

El primer muerto

Al primero en matar fue a Tomás Berrío Wilches, un docente de primaria que, de acuerdo con el concepto de quienes lo conocieron, tenía la paciencia y la serenidad de los viejos sabios.

“Cayó fulminado de varios tiros cerca de una mesa de fritos. ¡Pobre profesor! A muchos de los nativos de este pueblo nos enseñó matemáticas y urbanidad en la escuela”, dijo Domingo Sáez, uno de los sobrevivientes.

De acuerdo con los registros de la prensa de la época, al profesor Berrío lo mataron junto a los hermanos Carlos y Pedro Pablo Martínez. Este último cursaba estudios de ingeniería en la Universidad del Norte de Barranquilla.

“Desataron un ataque despiadado, demencial –afirma Segundo Benítez, otro de los sobrevivientes de la masacre-. Los que estaban bailando y los que corrieron, en busca de la salida, fueron blanco de los disparos. Yo me salvé porque en medio de la confusión de tiros y gritos me tiré al suelo, donde estaba uno de los acribillados, y me hice el muerto. Solo por eso hoy puedo referir la historia”.

José Miguel Amín, el gobernador de Córdoba de ese entonces, declararía que la matanza había sido a sangre fría, mientras que el alcalde de Buenavista, Enrique Llorente, admitió que ese ataque obedecía a una retaliación contra la guerrilla, pues en esos momentos, un bloque del ELN operaba en la zona, afirmación que jamás justificara lo ocurrido.

La amenaza de Los Magníficos

Cuatro días antes de la masacre, los municipios de Planeta Rica y Buenavista amanecieron con un amenazante mensaje escrito en las paredes de algunas de sus casas: “Ya llegaron a limpiar Los Magníficos”.

Nadie fue capaz de interpretar o adivinar el fondo de dicho mensaje. La comunidad coincidió en que se trataba de un aviso por parte de un grupo armado al margen de la ley que se hacía llamar con el nombre del afamado grupo que protagonizaba la muy aclamada serie de acción norteamericana de los años 80, Los Magníficos. Pero a nadie se le cruzó por la mente la idea de que esa ‘limpieza’ se efectuaría en Mejor Esquina.

Después de consumada la masacre, en Mejor Esquina y toda Córdoba se tuvo la certeza de que un escuadrón de 15 personas, autodenominado Los Magníficos, fue el autor de la masacre. Nadie refutaría esa creencia.

Tiempo después, de acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) se pudo establecer que el paramilitar y narcotraficante Fidel Castaño Gil, hermano de Carlos Castaño, lideró la masacre de Mejor Esquina. Sin embargo, el caso quedó en la impunidad absoluta, puesto que el proceso en sí nunca arrancó. Los familiares de las víctimas no vacilan en afirmar que la investigación no prosperó por la inoperancia de la justicia y la Fiscalía.

Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (Cohdes) reconoce abiertamente, y con mucho pesar, que la masacre de Mejor Esquina quedó en la más grande impunidad.

Sobre la matanza en Mejor Esquina –la primera de esa magnitud en la Costa Caribe colombiana- en el pueblo y en el resto del departamento de Córdoba se manejan dos hipótesis: la cacería que los paramilitares emprendieron contra Rafael Pastrana Martínez, conocido con el alias de ‘Nochila guapa’, individuo de la región que lideraba una fracción insurgente de EPL, y que supuestamente estaría en esa noche en el fandango. El rumor tomó fuerza porque, según testigos, los criminales les preguntaban en voz baja a los asistentes quién ahí era ‘El Rafa’, como también se le conocía a Pastrana Martínez, asesinado años más tarde en Cartagena. La otra hipótesis la hizo circular el DAS: todo obedeció a una guerra declarada entre narcotraficantes y paramilitares de la primera generación, bajo la conducción de Fidel Castaño.

Las huellas del dolor

Fueron en total 28 personas asesinadas en Mejor Esquina (Córdoba). 27 de ellas se encontraban en la finca ‘La Florida’. He aquí la lista.

Tomás Berrío Wilches, Eduardo José Mercado, Cleto Martínez, Marcos Martínez, Benicio Benítez, Donaldo Benítez, Freddy Martínez, Sergio Tomás Rivero, Silvio Primitivo Pérez, Justo Ramón Nisperuza, Carlos Márquez Benítez, Pedro Pablo Márquez Benítez, José Guerra, Óscar Sierra Martínez, Domingo Sáenz, Atanasio Sáenz, Silverio Sáenz, José Manuel Sáenz, Jaime Hoyos, Juan ‘El Mono’ Bertel, Juan Avecedo, Luis Sierra, Rogelio Montañez, Silvio Melendres, William Barragán, Carmen Avilés Barragán, ‘El Mono’ Ensuncho y Juan Acevedo (único que no se encontraba en el fandango).

Dos palmeras y varios árboles de regular envergadura permanecen aún en pie en el lugar que sirvió de epicentro del fandango macabro. Lo demás fue destruido. En un amplio solar lleno de maleza quedó transformado el predio en el que estaba la finca “La Florida”, sinónimo de hospitalidad, de belleza, de esparcimiento.

“Derribar esa casona fue lo mejor que pudo ocurrir, pues haberla conservado era algo así como mantener viva la imagen de nuestra tragedia. Y no es que nos hayamos olvidado, pero ver la finca significaba martillar y martillar en los recuerdos”, conceptúa Wilson Martínez, uno de los asistentes a la fiesta, que aquella noche se marchó temprano, minutos antes de que llegaran ‘Los Magníficos’, gracias a que su mujer lo hostigó con la cantaleta de que “ya estaba bueno, que ya tenía sueño”.

Hoy residen en Mejor Esquina menos de la mitad de los 1600 habitantes que poblaban el caserío en aquel 1988. “Muchos se fueron a tratar de sepultar aquellas penas e iniciar un nuevo ciclo de vida en otras tierras: Buenavista, Planeta Rica, Sincelejo, Barranquilla y Maicao.

El tiempo pasó, pero el recuerdo al igual que las heridas, permanecen vivos...

CAPÍTULO 6



La masacre de **Chengue**



Gran parte de Colombia y el mundo supo de la existencia de Chengue, pocas horas después de aquel aciago amanecer del 17 de enero de 2001, cuando cerca de 60 paramilitares, a punta de garrote, machete y balas asesinaron con sevicia a 28 hombres, todos campesinos, residentes en ese corregimiento no mayor de cien casas, perteneciente a Ovejas (Sucre), región de los Montes de María.

Chengue ni siquiera aparecía en los mapas. Es más, hoy sigue siendo un territorio desconocido, cuyo nombre brilla por su ausencia en el amplio segmento que geográfica y políticamente le pertenece al departamento de Sucre.

Se sabe que está ubicado en una planicie, entre cerros y colinas, al norte de Ovejas, la cabecera municipal, de la cual está distanciada a 40 kilómetros por un camino de herradura, cuyo tránsito se torna casi imposible en las épocas de lluvia.

Chengue está relativamente cerca de Chalán (Sucre) y Macayepo (Bolívar), pueblos azotados también por la guerrilla y el paramilitarismo.

Antes de que las manos criminales sembraran el terror con los primeros rayos de la aurora, Chengue era un pueblo anónimo como la mayoría de los territorios rurales del Litoral Norte colombiano, tan inmersos en el atraso y en el olvido sistemático de los gobiernos que pareciera una política estatal, pero con una alegría inacabable de sus moradores, que la esbozaban a flor de piel.

Su gente trabajaba y vivía de la agricultura, especialmente de maíz, aguacate y tabaco mientras esperaba con avidez la segunda quincena de junio, para involucrarse en la celebración de las fiestas de San Juan, amenizada con fandango y licor. Las penas quedaban relegadas a un segundo plano.

“Aquí se respiraba la paz hasta que llegaron los paramilitares, acusándonos de guerrilleros, matando a nuestros hijos y obligándonos a salir de nuestras casas. Lo peor de todo es que en este país hablan de reparación, de indemnización, y la verdad es que a Chengue no ha llegado una ayuda sólida”, se queja Santiago Morales, uno de los pocos antiguos pobladores que se resistieron a abandonar el pueblo.

Sentado en la puerta de entrada de su casa, con el torso desnudo, mitigando de esa manera los latigazos de la fuerte temperatura del mediodía, Morales asegura que la tristeza lo está devorando con mordiscos devastadores no tanto por el recuerdo de su hijo Dairo Rafael, abatido a punta de porrazos, sino porque de nada sirvió su muerte.

“Ya se cumplieron diez años de la masacre de nuestros hijos, y con Chengue no pasa absolutamente nada. Seguimos enterrados, con una pésima vía, con un

colegio que no tiene profesores y con unos servicios de agua y electricidad que son nulos. Estamos realmente jodidos”, afirma Morales.

El hombre dice que en reiteradas ocasiones tropas del Ejército llegaron a Chengue y trataron a los pobladores de guerrilleros. “Es verdad que por el pueblo pasaban guerrilleros del frente 37 de las FARC, al mando de Martín Caballero, pero nosotros nos manteníamos al margen. Nosotros siempre estuvimos en medio de dos fuegos: el Ejército y la guerrilla, pero nunca vivimos una desgracia como esa que nos hicieron vivir los paracos”, señala Morales.

Crudas evocaciones

Santiago Morales no esconde el resentimiento ni el dolor que lo quemar por dentro. “Cuando hablo siento que mis heridas se curan, no quedo completamente, pero esto me sirve para mitigar las penas”, dice el hombre de 74 años que vive con su hija Mayra Morales. El hombre le da curso a sus evocaciones.

Mi hijo Dairo Rafael Morales Díaz, a quien todos conocían como ‘El Mono’, tenía 43 años cuando los ‘paracos’ lo mataron a punta de golpes de mona en la cabeza.

Recuerdo que aún no habían salido los primeros rayos del sol cuando escuché a lo lejos un ruido extraño. No supe en ese momento qué ruido era, pero mi corazón me decía que algo malo estaba pasando. Enseguida sentí que la luz se fue.

Unos minutos después escuché que pateaban con violencia la puerta de una casa cercana y oí los gritos de mujeres y niños. Enseguida recordé que la tarde anterior un par de vecinos habían dicho que estaba regado el rumor de que en el camino a Macayepo, corregimiento de El Carmen de Bolívar, habían visto gente rara, fuertemente armada.

Yo, guiado por mi temor latente, tomé una camisa, salí por el patio, me brinqué la cerca y empecé a correr en medio del follaje.

Corrí y corrí sin parar. En mi huida divisé a lo lejos la candela que consumía los ranchos y alcancé a oír los gritos despavoridos de la gente.

Recuerdo que el sol estaba ya reinando en el cielo cuando me encontré con unos soldados. No sé cuánto tiempo duré corriendo sin parar. Solo recuerdo que salí en medio de la oscuridad, y la claridad me sorprendió. Le conté a los soldados lo que había medio visto, y lo que había medio escuchado, y regresé con ellos al pueblo.

Al llegar me encontré con el cuadro más desgarrador de mi vida: vi cuerpos regados en el frente de una casa cercana a la mía, todos con las cabezas destrozadas, a punta de monas y de objetos contundentes. Entre los muertos estaba, casi irreconocible, Dairo Rafael, mi hijo. En ese momento aborrecí haber nacido. Nunca antes había sentido tanto dolor en mi alma. A los pocos días me fui para Sincelejo, adolorido. Pero a los dos meses regresé. No me hallé allá. Mi paz, pese a todo, está acá.

Mayra Judith Morales, hija de Santiago Morales, y hermana de Dairo Rafael, complementa que éste tenía en los brazos a su hija María Fernanda, de solo dos años, cuando los paramilitares irrumpieron en su casa, tras tumbar la puerta.

“Me contó la esposa de ‘El Mono’ que a él le arrebataron la niña de los brazos y a empujones lo sacaron a la calle, y lo mataron a mona física en la cabeza. Mi esposo se salvó porque en ese entonces vivíamos en el monte, a dos kilómetros del pueblo, y se quedó por allá. La esposa de mi hermano se fue al poco tiempo con sus hijos a Cartagena. Más nunca ha regresado”, dice Mayra.

Casi parecida a la de Santiago es la experiencia que vivió Julia Meriño, quien asegura que las 28 muertes las sintió por igual porque, en sus propias palabras, “todos éramos una familia, todos éramos como hermanos”.

El día de la matazón me desperté por la bulla en medio de la noche. No sé que hora era, pues habían cortado la luz, y todo era oscuridad. Los gritos de angustia, de terror de los vecinos llegaban nítidos a mis oídos.

Me levanté de la cama; cargué a mi bebecita de 10 meses; llamé a mi esposo, a mi hijo, a mamá y a un sobrino que vivía con nosotros y, sin pensarlo dos veces, salimos por el patio. Empezamos a ver las casas encendidas y emprendimos la carrera monte adentro. Nos escondimos en una casona que encontramos en medio de la vegetación hasta que salió el sol. Pasadas las 7 de la mañana

decidimos regresar para averiguar lo que había sucedido, y nos encontramos con la barbarie: el pueblo en llamas, cuerpos destrozados y familiares llorando. En el suelo, ensangrentados y sin vida, yacían mis tíos Andrés y César; mi primo Cristóbal, de solo 16 añitos; Juan Carlos y Elkin Martínez, primos hermanos de mi marido, y mis vecinos Luis y Giovanni. ¡Dios mío, qué es esto!, fue lo único que recuerdo, dije antes de romper un prolongado llanto.

Las 28 víctimas

Los paramilitares irrumpieron en el pueblo al final de la noche, entre la sombra ciega y los ladridos de los perros... Las mujeres aturdieron el cielo con sus gritos, como lo describió con maestría el poeta sucreño José Ramón Mercado, en su sentido poema “La masacre de Chengue”.

De acuerdo con el informe que horas después presentó en Ovejas el comandante de la Policía de Sucre, coronel Norman León Arango, los paramilitares llegaron a Chengue por el camino de Macayepo, algunos a pie, otros montados a caballos, y además de matar a los 28 campesinos, a los que acusaron de ser colaboradores de la guerrilla de las FARC, prendieron fuego a 32 de las 75 casas del pueblo. Esa aborrecible acción fue calificada por todos los organismos internacionales defensores de Derechos Humanos como uno de los casos más crueles del conflicto armado en Colombia.

En algunas de las viviendas que no fueron blanco de la candela, escribieron las siglas de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (AUC).

“Con sangre de las víctimas escribieron en las fachadas de las casas, ‘Fuera, guerrilla comunista’. Después saquearon las casas y quemaron algunas. En su partida dijeron que si regresaban y nos encontraban, no vacilarían en matarnos a todos”, dijo María Cequea, esposa de Jaime Rafael Meriño Ruiz, al que vio morir a punta de golpes en la cabeza con mona (almádena, mazo de hierro con mango largo, para romper piedras). Algunos alcanzaron a escapar. A otros se los llevaron y más tarde aparecieron muertos.

Coinciden las personas que presenciaron la barbarie de aquel 17 de enero de 2001 que a la mayoría de las víctimas las reunieron en el frente de una de las casas del pueblo, y allí las sacrificaron a golpes de mazos de piedra de moler.

“También les dieron hachazos sobre troncos de madera de picar carne. Los descuartizaron”, recuerda una moradora del pueblo.

“A las primeras personas las mataron con garrotes y monas en las cabezas, después utilizaron machetes, y ya en la mañanita emplearon armas de fuego”, añade Mayra Morales.

Las 28 personas que resultaron muertas aquella madrugada respondían a los nombres de Pedro Manuel Barreto Arias, Néstor Montes Meriño, Pedro Adán Ramírez (de 60 años), Luis Óscar Hernández Pérez, Arquímedes López Oviedo (48), Cristóbal Meriño Pérez (22), Rusbel Manuel Oviedo Barreto (28), Giovanni Barreto Tapias, Luis Enrique Buelvas Olivera, César Segundo Meriño Mercado (62), Videncio Quintana Meza (65), Videncio Quintana Jr., Mario Manuel Quintana Barreto (24), Dairo Rafael López Meriño, Francisco Santander López Oviedo (60 años), Jaime Rafael Meriño Ruiz, Luis Miguel Romero Berrío, Ramón Andrés Meriño Mercado (60), Manuel Guillermo Rodríguez Torres, Juan Carlos Martínez Oviedo (28), Rafael Romero Montes (33), Elkin David Martínez Oviedo (16), Alejandro Rafael Monterroza Meriño (55), Néstor Meriño Caro (50), Assael López Oviedo (45), Dairo Rafael Morales Díaz (43), Julio César Lora Canole y Edison Berrío Salas.

“Juan Carlos y Elkin David Martínez Oviedo, primos hermanos de mi marido, vivían retirados del pueblo, en una pequeña parcela. Atraídos por la gritería y el fuego, y guiados por su espíritu de cooperación, salieron de su rancho a fin de prestar ayuda, pero fueron recibidos con mona”, señala Julia Meriño.

¿Qué pasó después?

De acuerdo con las investigaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación y las versiones libres suministradas por los paramilitares desmovilizados, la masacre de Chengue se planeó en la Finca El Palmar de San Onofre.

En su declaración ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, antes de ser condenado a 23 años y 8 meses de prisión por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, el desmovilizado Úber Enrique Bánquez Martínez,

alias “Juancho Dique”, confesó su participación en la masacre de los 28 campesinos en Chengue.

Así mismo, en su versión del 30 de julio de 2008, aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, y hurto calificado y agravado.

Actualmente preso en la Cárcel Modelo de Barranquilla, “Juancho Dique” aseguró que la orden de la incursión en Chengue la dio Carlos Castaño. Éste le había pedido una lista a Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Rodrigo Cadena”, con los nombres y apellidos de las personas que consideraba debían ser ejecutadas. Así las cosas, la masacre fue perpetrada por el frente paramilitar “Héroes de los Montes de María de las AUC”.

Dijo “Juancho Dique”, en su versión libre, que en la finca El Palmar de San Onofre, un suboficial de la Armada le entregó armas, municiones, camuflados y una cuantiosa suma de dinero con el fin de que cumpliera la misión.

A la confesión de “Juancho Dique” se sumó la del paramilitar Emiro Correa Viveros, alias “Convivir”, quien aseveró que la masacre de Chengue obedeció a la búsqueda de un ex guerrillero de nombre Álvaro Meriño Erazo.

Correa Viveros dijo que de la masacre del pueblo estaban enterados los ex senadores Álvaro “El Gordo” García, el gobernador Jorge Barraza Farak, y los ex gobernadores Salvador Arana (2001–2003), Jorge Anaya (2004–2007), Édgar Martínez Romero, Jorge Luis Feris Chadid, ex representante a la Cámara, y la ex alcaldesa de Palmito, Graicy Díaz. Todos fueron condenados por sus nexos con los paramilitares, con excepción de Édgar Martínez y Jorge Barraza Farak.

Carlos Castaño Gil fue ajusticiado por orden de su propio hermano, Vicente Castaño, en abril de 2004, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. El homicidio lo cometió Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “*Monoleche*”, en una finca cercana a Santa Fe de Antioquia. Dos años después fueron hallados sus restos.

“Rodrigo Cadena” desapareció en 2005 en predios de Santa Fe de Ralito (Córdoba). Su cuerpo nunca fue encontrado.

Las consecuencias

Por la masacre de Chengue, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo condenó en julio de 2008 a la Nación a pagar por cada una de las personas malogradas el equivalente a 300 salarios mínimos mensuales.

El fallo halló responsable, por omisión, a la Nación, el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional.

El contralmirante Rodrigo Quiñónez, a la sazón comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina con sede en Sincelejo, fue sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación.

También fueron declarados responsables el capitán de Fragata, Óscar Saavedra Calixto, el capitán de Corbeta Camilo Martínez Moreno, el suboficial de Infantería de Marina Rafael Bossa Mendoza y el suboficial segundo Rubén Darío Rojas Bolívar.

La Fuerza Pública, en el concepto de la Procuraduría, no tomó las medidas necesarias, muy a pesar de que Chengue, al igual que las poblaciones de Don Gabriel y Salitral, pertenecientes a Ovejas, habían manifestado en forma reiterativa su temor ante una inevitable incursión paramilitar.

La noche anterior a la matanza –enero 16 de 2001– se consignó en los libros de anotaciones de la Policía de Sucre que el coronel Rodrigo Quiñónez, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, se enteró antes de las 12 de la noche de que había presencia paramilitar en la zona. Sin embargo, de acuerdo con las conclusiones de la Procuraduría, el coronel no actuó como debía. Fue pasivo de manera exagerada y no hizo nada para evitar la tragedia.



El aciago amanecer de Villanueva



Convencidos están, los habitantes de El Cafetal, el barrio más antiguo y populoso de Villanueva (La Guajira), de que los 12 jóvenes que fueron masacrados en la madrugada del 8 de diciembre de 1998 en diferentes puntos de ese sector, fue por “física envidia”, pues, de acuerdo con la opinión unánime de los lugareños, no hubo ninguna razón comprobada de peso para que se diera ese derramamiento de sangre.

Ni siquiera le dan crédito a las declaraciones del sanguinario jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien admitió haber dado la orden en la masacre de El Cafetal porque –según él– “se había convertido en un barrio campamento del frente Luciano Ariza de la guerrilla del ELN”.

“Esas declaraciones del señor Jorge 40 son una infamia. A él hay que condenarlo dos veces: por criminal y por calumniador”, señala Mario Guzmán, habitante del barrio El Cafetal.

“Las noticias que producía El Cafetal eran siempre de alegría, pues su gente en todo momento ha sobresalido. Eso, de alguna manera, despertó envidia en otras regiones cercanas. Entonces, empezaron a darnos la mala fama de guerrilleros, cosa que más que falsedad, fue una infamia”, sostiene el comerciante José López.

“De Villanueva son los grandes cantantes, compositores y folcloristas. De aquí son los Hermanos Zuleta, Daniel Celedón, Israel y Rosendo Romero y Jorge Celedón, por citar solo algunos nombres célebres. Aquí se realiza el Festival Cuna de Acordeones, el festival acordeonero más auténtico de este país. Por eso, porque somos hijos de una tierra bendita, nos quieren achacar todos los males, dice Carlos Añez Lián, un pensionado del Estado.

“Paramilitares y militares participaron en esa barbarie. Los primeros de manera activa y los segundos porque no hicieron absolutamente nada para impedir los hechos, porque sabían lo que iba a pasar. De eso no me queda la menor duda. Las vidas de esos 12 mártires de El Cafetal fueron segadas por envidia, porque en nuestro barrio solo existe gente de bien, gente talentosa, gente trabajadora, gente honesta. Es cierto que por aquí ha merodeado la guerrilla, pero ninguno de esos 12 mártires andaba en malos pasos. De eso puedo dar fe yo, que fui profesor de la mayoría de ellos”, asegura, sin temblarle el tono de su voz, el docente Víctor Montero Churio.

El hombre cierra los ojos, baja la cabeza y se queda unos segundos en silencio. Luego levanta la frente, abre los ojos y nos pide que grabemos todo lo que va a decir a continuación:

En El Cafetal se vivió una noche de velitas llena de alegría antes de que la desgracia se apostara en nuestra tierra. Esa noche recuerdo que había caído

una pertinaz llovizna... Personas de todas las edades paseaban por las calles. La música de acordeón imperaba en el ambiente.

En la madrugada del 8, entre las 2:00 y las 4:00, se desató la tormenta de balas. Ninguna mujer pereció. Las balas hicieron blanco mortal en puros hombres, y todos eran jóvenes entre los 16 y los 30 años.

A las 12 víctimas las recuerdo muy bien, pero en especial a Ramiro Moisés Campo Peñalosa. Era un muchacho de 27 años, alegre, extrovertido, folclórico, que se había adueñado, por así decirlo, de las fiestas de la Cruz de Mayo. Por eso le decían ‘Crucito’. Él trabajaba en La Mina, allá en El Cerrejón. Su único defecto era que no se las llevaba bien con el Ejército, pero nunca le faltó el respeto. Él era un muchacho activo que vivía pendiente de la comunidad, todo un líder cívico.

Ramiro se encontraba departiendo en casa de unos amigos. El ron se había acabado y mandaron a uno de los muchachos que estaban ahí a que fuera a comprar una botella. En el camino, el muchacho, que se llamaba Javier Olmedo, fue acribillado por los uniformados que en esos momentos habían llegado a El Cafetal, procedente del barrio San Luis.

Transcurrieron los minutos y Ramiro, intrigado por la tardanza de Javier, fue en compañía de un amigo a averiguar qué había ocurrido. Pasando por su casa, Ramiro se topó con los uniformados y les dijo algo. Uno de ellos, en respuesta, le disparó varias veces. El muchacho murió en forma instantánea.

Esa noche también cayó abatido un sobrino mío, de nombre Elis Fabián Montero. Tenía apenas 20 añitos, y estudiaba Sistemas en Valledupar. Él ayudaba a mi madre, quien asolada por la pena, moriría tres meses después.

Javier Enrique Olmedo, el muchacho que había ido en busca del ron y a la postre se convertiría en el primer muerto de la noche, tenía 21 años, y estudiaba en La Universidad de La Guajira. Antes de reunirse con sus amigos del barrio -dos cuadras más adelante- había recibido en la casa de sus padres la visita de su novia y su suegra.

“¿Qué puedo decir? –se pregunta Rosa Campo de Olmedo, la madre de Javier, con la voz quebrada, en una muestra contundente de que las heridas de su alma

aún están sin curar-. Mi hijo era un niño sano, estudioso, amigo de sus amigos. Pueden preguntarles a los habitantes de este barrio, y verán que la opinión mía coincide con las de ellos. Por eso no me explico por qué lo mataron ni por qué entraron a mi casa y la llenaron de plomo”.

Hernán Olmedo, hermano menor de Javier, recuerda que él estaba durmiendo cuando mataron a su hermano. “Me levanté sobresaltado y me fui a la casa de enfrente. Segundos después llegaron los paramilitares a mi casa y la incendiaron a plomo. A mi mamá, que se encontraba con la suegra de Javier, no la mataron porque Dios es grande, pero en la casa hicieron desastre”, afirma.

Los nueve restantes mártires

Un joven de 16 años, que respondía al nombre de José Aníbal Garcerón Mejía, y quien cursaba el noveno grado de secundaria en el Colegio Roque de Alba, fue acribillado en una esquina, cerca de la casa donde vive la familia del cantante Jorge Celedón, según el relato de Ugalvis Yaguna Díaz.

“Allá se escuchó, clarito, cuando uno de los aproximadamente 20 paramilitares gritó que no dejaran vivo a ninguno de estos guerrilleros. Era claro que a los muchachos se les asesinó por ser dizque de la guerrilla”, afirma Yaguna Díaz. Otro testigo de aquella noche dijo que el nombre de José Aníbal Garcerón Mejía estaba escrito en una lista que llevaba uno de los paramilitares.

Julio Contreras Rincones, de 22 años, también estudiante del Roque de Alba, y a las puertas de graduarse 10 días después, fue asesinado, al igual que los hermanos Néfer Augusto y Alexander Enrique David López, de 23 y 28 años, en ese orden respectivo.

“A mi marido Alexander Enrique lo mataron en el patio de nuestra casa. Los hombres esos derrumbaron la puerta a punta de patadas y porrazos; entraron a la casa y lo sacaron del cuarto. Eran muchos hombres, fuertemente armados y vestidos con ropa militar. Nuestros dos hijos oyeron el estropicio y despertaron asustados, dando gritos; yo, que tenía ocho meses de embarazo, les imploré que no le hicieran nada, pero esos tipos me apartaron con brusquedad y arrastraron a mi marido al patio. Ahí lo acribillaron. Él era un conductor independiente”, narra Yolelis Turizo, la compañera de Alexander Enrique David López.

“¿Guerrilleros esos muchachos que no tenían más preocupaciones que estudiar y parrandear? ¡Por Dios!, eso no se lo creen ni quienes acabaron con sus vidas. Ese fue otro de los tantos falsos positivos del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, afirma Carlos Añez.

En otro sector del barrio, cerca del muy concurrido estadero “La esquina de Geño”, los asesinos ataviados con prendas de uso privativo de las fuerzas militares entraron a la casa de Bartolomé Contreras Molina, de 28 años, y lo mataron ahí mismo; José Luis Rosado Quintero corrió con igual suerte. Éste, de acuerdo con la opinión de las personas que lo conocieron, “no era ni sal ni agua”. “Era un muchacho que tomaba la vida como viniera. Nunca se le oyó discutir con nadie ni opinar sobre nada”, afirma Berta Meriño.

Cerraron la nefasta lista Jeison Daniel Rojas, José Dangond Quintero y Erinón José Damián Rojas.

Aquella madrugada también resultaron heridos, en los barrios San Luis, Las Delicias y El Cafetal, Leonel y Alfredo López, Enrique Molina y Petra Molina, la única mujer impactada por las balas. Los cuatro heridos recibieron auxilio médico en centros clínicos de Valledupar. Todos sobrevivieron.

“Leonel López recibió un impacto de bala en uno de sus antebrazos y logró salvarse porque huyó en veloz carrera”, señala su primo David López.

Lo que la gente recuerda

Los diferentes medios de comunicación de la época –radio, prensa y televisión– divulgaron que los paramilitares irrumpieron en la madrugada del 8 de diciembre, aprovechando el bullicio tradicional de los festejos de la Virgen de la Inmaculada Concepción, para que sus disparos no se notaran mucho. Esa teoría la confirmó, en su versión libre ante la Fiscal Tercera de Justicia y Paz de Barranquilla, el propio “Jorge 40”.

“Tratamos de hacer la menor bulla posible”, dijo Jorge 40, desmovilizado jefe paramilitar, comandante del Bloque Norte, cuyo centros de operaciones estaban en los departamentos de Cesar, Magdalena, La Guajira, Atlántico y Santander, y responsable de varias masacres en esos cinco entes territoriales durante más de una década.

“Desde el principio supe que las cosas no marchaban bien, que algo raro estaba pasando. En verdad, yo sí vi el ambiente enrarecido”, apunta doña Liduvina Díaz, quien en ese entonces contaba 61 años.

“Eso que se vivió en el pueblo ha sido lo más terrible en muchos años. Pensamos acá que si los muertos hubieran sido gente mala, hasta lo hubiésemos festejado, pero ninguno de esos 12 muertos tenía antecedentes con la guerrilla. Eso fue una injusticia grandiosa”, dice Remberto Celedón.

El comandante de la Policía de La Guajira, Julio César González Forero, dijo al día siguiente, en rueda de prensa, que los paramilitares pasaron por el barrio San Luis haciendo disparos y consumaron su fechoría en El Cafetal.

“Antes de que hicieran la matanza con lista en mano, los homicidas hostigaron la estación de Policía de la localidad”, dijo el Comandante.

Álvaro Cuello Blanchar, gobernador en ese entonces de La Guajira, no dudó en atribuir la matanza a los paramilitares, mientras que monseñor Juan Carlos Jaramillo, Arzobispo de Riohacha, calificó a los asesinos como “Hijos de las tinieblas”.

Recuerda Carlos Alberto Quintero que las exequias de los 12 hombres se cumplieron en la tarde del 9 de diciembre en el cementerio de Villanueva.

“Fue una escena realmente conmovedora. Los 12 ataúdes reunidos ahí, en la plazoleta del camposanto, cada uno con sus dolientes. Parecía una escena sacada de una película de terror”, recuerda Hernán Olmedo.

Multitudinario y lleno de dolor fue el recorrido fúnebre desde la iglesia del barrio hasta el cementerio. Cada uno de los féretros fue alzado en hombros por amigos y familiares.

Ramiro Moisés Campo Peñaloza, el directivo de la Junta de Acción Comunal, fue sepultado al son de una tumbadora y un viejo paseo del maestro Rafael Escalona. Su sepelio fue uno de los más conmovedores.

“Ese hombre era nuestro gran vocero. El Cafetal estaba bien representado en él. Cómo nos dolió su muerte”, dijo Yolelis Turizo.

“Los días que vinieron después del entierro colectivo fueron tormentosos -apunta Liduvina Díaz-. Los moradores del barrio estábamos temerosos. Con la caída de la tarde, todos nos encerrábamos. Las calles permanecían solas. Nadie se sentaba en las puertas de sus casas, como era costumbre. El miedo se apoderó de todos”.

En el sur de La Guajira

Villanueva es uno de los 15 municipios pertenecientes a La Guajira. Está ubicado en el sur del Departamento.

Tiene una superficie de 265 kilómetros cuadrados. Sus límites son; por el Norte, el municipio de El Molino; por el Sur, Urumita; por el Oeste, San Juan del Cesar (La Guajira) y el departamento del Cesar, y por el Este, la República Bolivariana de Venezuela.

En lo que hoy es Villanueva –aseguran los historiadores– tuvo su asiento el clan aborigen de los Itotos, miembros de la vasta familia Chimila, diseminada en la margen izquierda del Río Villanueva.

Villanueva está distanciado a 170 kilómetros al sur de Riohacha, la capital de La Guajira. Sus fiestas patronales, en honor a Santo Tomás de Villanueva, las celebra desde el 18 de septiembre.

Es un municipio que basa su economía en la ganadería, la agricultura y el comercio. Este último es la actividad que mayor empleo genera en el casco urbano. Está conformado por depósitos de víveres que comercializan productos colombianos y del vecino país de Venezuela; también es muy común la compra-venta de gasolina de Venezuela.

El Cafetal, epicentro de la matanza del 8 de diciembre de 1998, es uno de los 27 barrios que conforman Villanueva. Está ubicado en el Sur Este del municipio, en el piedemonte de la Serranía del Perijá.

“Al barrio se le bautizó El Cafetal porque, según los historiadores, desde muchísimo antes de su creación, ese amplio sector pasaba regado de pepitas de café provenientes de las estribaciones de la Serranía del Perijá. Hoy todavía es el día en que las calles son impregnadas de café”, afirma el profesor Víctor Montero.

“Campesinos, en su mayoría, residen en El Cafetal. Tienen sus fincas y pequeñas parcelas en las colinas del Perijá. Los cultivos que predominan en la zona son aguacate, maíz y un café orgánico de excelente calidad que constituyó durante muchos años la base sólida del comercio de los habitantes”, dice José López.

“Con la masacre del 8 de diciembre, mucha gente de nuestro barrio abandonó sus casas y se desplazó al Valle, a Riohacha y hasta Venezuela. Los cultivos decayeron”, señala Carlos Alberto Quintero.

“El Cafetal es un barrio muy unido. La gente se quiere mucho. Aquí se conservan las tradiciones de pueblo, es decir, si usted va en hora de almuerzo es invitado a la mesa; la gente se reúne en Plaza Escolástico Romero, edificada en honor al padre de Israel Romero, el acordeonero del Binomio de Oro”, dice Patricia Menco.

“El Gobierno reparó a las familias de las víctimas; les dio una cifra significativa, pero la vida del ser humano no tiene valor económico. Los valores del sentimiento humano no se compran con dinero. Es lo mismo que el amor”, dice Rosa Campo de Olmedo.

“El Gobierno dio dinero, pero creo que ese dinero debería invertirlo en otras ayudas. La paz no se consigue con plata, sino brindándole oportunidad a toda la gente para que trabaje y gane su sustento. Mientras haya una persona con hambre, existirá quien agarre un fusil para irse para la guerrilla o las autodefensas o se meta a la delincuencia común”, reflexiona el profesor Víctor Montero.

En su versión libre rendida ante la Unidad de Justicia y Paz, antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2008, “Jorge 40” aseguró que la matanza cometida por el Bloque Norte, bajo su mando, obedeció a que El Cafetal era el campamento del frente Luciano Ariza del ELN, comandado por Wilmer López, alias “Mime”, quien cometió acciones bélicas en zonas rurales de Riohacha y los municipios de Urumita, Fonseca, Barrancas, El Molino y Villanueva. Aseguró “Jorge 40” que la acción criminal fue comandada por alias “Daniel”, escoltado por “un pequeño grupo de paras. “Daniel” o “Daniel Centella”, cuyo nombre verdadero es John Jairo Hernández Sánchez, quien purga una condena por diversos asesinatos.



La Macabra

despedida de año en Cieneguita



Con un retazo de tela manchado de tizne, que emplea para asir las ollas y calderos en sus quehaceres de la cocina, Astrid Barrios Anaya se seca los húmedos ojos, mientras evoca cómo era la vida en Cieneguita -uno de las ocho comarcas rurales que posee el municipio de Repelón (Atlántico)- antes de la incursión paramilitar que a garrotazos mataron a su

hermano Rodolfo y a otros cuatro hombres más, campesinos como él, que solo vivían para el cultivo y sus familias.

Todo acá era alegría, solidaridad y amor pese a las necesidades y las situaciones adversas propias de la gente pobre como nosotros. Nuestros hombres trabajaban por el bienestar del hogar. Aquí la gente se moría de vejez o de una enfermedad, pero jamás de asesinato. Eso acá no existía. Por eso, cuando ocurrieron las cinco muertes violentas esas, de manos de los paramilitares, el pueblo en su totalidad, y sin ponerse de acuerdo, decidió abandonar sus casas y marcharse a otras partes.

Desde que tengo uso de razón, llevo en mi memoria muchos recuerdos vividos en diferentes épocas de mi vida. Muchos alegres, muchos tristes. Pero el de la muerte de mi hermano es el que se mantiene presente en mí. Creo que sólo dejará de mortificarme cuando yo deje de existir.

Los ingratos recuerdos de Astrid

Asentada en el municipio de Las Tablas, a dos kilómetros de su pueblo natal, en una humilde casa ubicada sobre una colina en la que se divisa el sendero que conduce a Cieneguita, Astrid, cercana al medio siglo de vida, asegura no tener problema alguno para hablar sobre aquellos tenebrosos hechos.

Los hombres esos, vestidos con ropa militar, fueron tocando las puertas de las casas, e iban sacando a los hombres que eran señalados por dos encapuchados. A mi hermano Rodolfo lo sacaron, tal como hicieron con cuatro vecinos más.

Asustada, la esposa de mi hermano les preguntó a los hombres que para dónde se lo llevaban, a lo que solo escuchó, en respuesta: “Tranquila, él regresa luego”.

Eran cuando eso como las tres o cuatro de la madrugada, y la oscuridad era total. Como a las cinco de la mañana, cuando la gente del pueblo iba a buscar agua al jagüey, encontraron el cuerpo de Rodolfo, con la cabeza completamente destrozada. Junto a él estaban dos cuerpos más, los de Pedro Ospino, a quien le decían ‘El Guari’, y Rafael Ospino. Eran hermanos. Más adelante estaban los otros dos vecinos, Orlando Rico y Rafael Ospino Llerena, asesinados también en forma similar. Los asesinos no hicieron ningún disparo. Los mataron a punta de mona.

Un pueblo casi desconocido

La barbarie, que a la postre originaría el éxodo total de los habitantes de ese pedazo de tierra sumido en el atraso y carcomido por el olvido, tuvo lugar en la madrugada del 31 de diciembre del año 2000.

Repeleón es una de las 23 municipalidades -incluida la capital Barranquilla- que conforman el departamento del Atlántico. Está ubicado en el sur occidente. Presenta ocho comarcas rurales, de las cuales cinco son corregimientos y tres, veredas.

Los corregimientos son Arroyo Negro, Cien Pesos, Las Tablas, Rotinet y Villa Rosa. Y las veredas son Las compuertas, Pita y Cieneguita, esta última, de 25 casas, ubicada en el noroccidente de Repelón, distanciada a 20 kilómetros.

De acuerdo con la página oficial de la cabecera municipal, Cieneguita tiene en la actualidad una población de 33 habitantes. En sus momentos de paz llegó a tener más de un centenar de moradores.

Según el licenciado Antonio Romero Pérez, profesor de la única institución educativa que había en la vereda, los habitantes de Cieneguita eran gente trabajadora, campesina, con un espíritu espontáneo para la hermandad.

“El pueblo carecía de agua potable y su servicio de electricidad era deficiente. Tiene dos entradas: una que comunica con el departamento de Bolívar, muy larga, y la otra que comunica con Las Tablas. Ambas vías, destapadas, son imposibles de transitar en vehículo cuando llueve. Allá no hay un puesto de salud. Por eso cuando algún enfermo requería atención inmediata era llevado a Las Tablas en hamaca. De ahí era trasladado a Luruaco luego de pasar por Cien Pesos y Santa Cruz”.

La existencia de Cieneguita era totalmente desconocida para la gran mayoría de la población del Departamento, pese a ser una vereda de más de cien años. La prensa hizo referencia por primera vez al poblado el 2 de enero de 2001, dos días después de la masacre: “A garrotazos “paras” matan a 5 en Repelón”, tituló en primera página El Heraldó. La nota, firmada por Juan Alejandro Tapia, empezó así: “Cinco agricultores del caserío de Cieneguita, en jurisdicción del

municipio de Repelón, fueron asesinadas a garrotazos en la madrugada del 31 de diciembre por un comando paramilitar conformado por unos 30 hombres armados que provenían del departamento de Bolívar”.

Ana Barrios, quien estaba en Cieneguita en aquella fatal madrugada del último día del año 2000, asegura que su hermano Rodolfo tenía 46 años y era padre de 6 hijos.

“En mi caso resolví salir del pueblo con mis hijos y mi marido porque antes de irse del pueblo, y después de consumar las masacre, los paramilitares escribieron en varias casas mensajes alusivos a la AUC. Incluso, lanzaron voces de amenaza en el sentido de que si volvían y nos encontraban, arrasarían con todos nosotros. Mis hermanos Benjamín y Jorge, y mi padre Luis Jacinto, quien después moriría, también abandonaron el pueblo. Mis dos hermanos, a diferencia de la gran mayoría de la gente, volverían. Ellos van a darle vuelta a las casas que dejaron allá”.

Más testimonios

Plácida Cabezas, esposa de Pedro Ospino, ‘El Guari’, con el que procreó 14 hijos: 12 varones y 2 hembras, señala que su marido tenía 60 años cuando los paramilitares le quitaron la vida.

“Mi esposo era un hombre servicial, que no le hacía mal a nadie. No sé por qué lo mataron. Ni siquiera lo imagino. La última imagen que tengo de él fue cuando los hombres esos lo sacaron de la casa. Él me dijo, cuando se lo llevaban, que me tranquilizara, que a él no le iba a suceder nada”, dice la mujer, hoy radicada en el municipio de Villanueva (Bolívar).

Alfonso Macea Olivares, vecino de Cieneguita, dice que al “Guari” lo mataron porque lo acusaban de ser colaborador de la guerrilla. “La gente de los alrededores rumoreaban que “El Guari” era “boleteado” por la guerrilla, que él tenía que darles plata por presión, mas no por gusto”, dice el hombre.

Miryam Pérez, esposa de Rafael Ospino Llerena, y radicada en Villanueva, prefiere no hablar del tema. “Nunca supe por qué mataron a mi marido. Nadie me ha explicado nada. Su muerte quedó impune”, dijo.

Villanueva, la última morada

Los cinco cuerpos fueron llevados en la mañana del 31 de diciembre a Las Tablas. De ahí los transportaron en un camión hasta la Fiscalía de Barranquilla. El entonces comandante de la Policía del Atlántico, Brigadier Coronel Arnaldo Sandoval Salamanca declaró a los medios que en principio a ninguna de las víctimas se les relacionaba con grupos armados al margen de la ley ni con hechos delictivos.

Dos días después, tras tensionantes sesiones de preguntas y respuestas a los familiares y una serie de requisitos, los cinco cuerpos recibieron por fin cristiana sepultura en Villanueva.

“Cada quien decidió que las honras fúnebres de los suyos fuera en Villanueva porque hacia allá nos trasladamos las viudas”, afirma Beatriz, esposa de Rodolfo Barrios Anaya.

Familiares de las víctimas no dudan en aseverar que después de la muerte de sus hombres no ha pasado absolutamente nada.

“Nosotros hemos oído hablar de reparación, de indemnización, de esto y lo otro. Incluso, por aquí nos han visitado gente de las naciones Unidas, de la Fiscalía, pero todo se queda en palabrerías. No ha habido ninguna ayuda”, dice Astrid Barrios.



El día que la guerra llegó a la Ciénaga Grande



En un rincón de la oficina del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta reposan 38 folios, cada uno de aproximadamente 500 páginas, en los que se encuentran las confesiones y testimonios de algunos de los protagonistas de lo que considerado el peor de los actos de barbarie cometidos por el Bloque Norte de las Autodefensas contra una de las comunidades más pobres e indefensas del Caribe colombiano.

En esa pila de documentos apretujados en fólderes, algunos amarrados con pedazos de pita que aseguran que ninguna hoja se pierda, los testigos narran en detalle lo que pasó entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de noviembre del año 2.000, cuando un comando de 60 hombres abordo de cinco lanchas conformaron una caravana del terror que salió del municipio de Salamina (Magdalena), recorrió la Ciénaga Grande de Santa Marta hasta llegar al corregimiento de Nueva Venecia o El Morro, pueblo palafítico, dejando a su paso una estela de sangre, dolor, luto y miedo que después de 10 años aún se mantiene en este paraje perdido de la geografía nacional.

Entre la noche y la madrugada de esos dos días, 40 pescadores fueron masacrados a bala, machete y puñal por orden de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, acusados de ser colaboradores de la guerrilla del ELN, y como una forma de retaliación por el secuestro, el 6 de junio de 1999, de nueve socios del club de pesca de El Torno, en Barranquilla, mientras paseaban en sus lanchas cuando fueron abordados por los guerrilleros, y se los llevaron utilizando como vía de escape los caños y la Ciénaga Grande para subirlos a la Sierra Nevada de Santa Marta. Las autodefensas tenían la sospecha de que algunos de los secuestradores se escondían en los palafitos.

En busca de los responsables de este secuestro y sus colaboradores, Jorge 40 ordenó una primera incursión contra los pescadores de la Ciénaga Grande. Fue así como el 11 de febrero del 2.000 en Trojas de Aracataca, palafito ubicado en la desembocadura del río Aracataca, al sur de la Ciénaga Grande, las autodefensas asesinaron a 10 pescadores. Desde ese día todo el complejo lagunar se llenó de miedo al escuchar las historias de decapitaciones, ejecuciones y torturas públicas de los líderes y gente conocida en ‘Cataca’. De esta forma los paramilitares lograron silenciar a pescadores humildes, que por último terminaron huyendo despavoridos dejando sus pertenencias, animales, casas y hasta sus sueños, para sumergirse en un mundo de miseria, abandono y olvido, de donde muchos no han podido salir.

‘La masacre de la Ciénaga Grande’, como se le conoció a este macabro exterminio, provocó el desplazamiento de por lo menos tres mil familias de pescadores del complejo lagunar, y fue calificada por las organizaciones internacionales de Derechos Humanos como una prueba clara de la degradación del conflicto armado en Colombia.

Ex paramilitares como Edmundo Guillén Hernández, conocido con el alias de ‘Caballo’, y Richard Manuel Fabra Romero, confesaron la autoridad de la masacre y acusaron a Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias ‘Esteban’, de haberla dirigido, guiado por alias Giovanni, un desertor del ELN e informante de las autodefensas, quien era el que señalaba a los supuestos colaboradores de la guerrilla en esa zona.

Jorge 40, cerebro de la macabra incursión, reconoció su participación siete años más tarde ante un juez de la Unidad de Justicia y Paz en versión libre (el 3 de julio del 2007) en Barranquilla, acción que denominó “Hechos de guerra”. Allí, ante el juez y familiares de las víctimas, dijo que fue una operación militar y no una masacre contra civiles para controlar un territorio estratégico que históricamente dominaba el ELN. En sus argumentos, el ex comandante paramilitar, quien se encuentra detenido en Estados Unidos, a donde fue extraditado el 14 de abril de 2008 junto con otros ex jefes paramilitares, aseguró que después de esa ‘operación militar’ las autodefensas pudieron desvertebrar el accionar de ese grupo entre la Sierra Nevada y los puertos a orillas del río Magdalena.

Por esta masacre, el Juez único penal especializado del circuito de Santa Marta, Flavio Rojas Corro, condenó el 11 de octubre del 2010 a Rodrigo Tovar Pupo, a 570 meses de prisión –unos 47.5 años- por los delitos de homicidio agravado y desplazamiento forzado. Si bien el fallo permitiría a los familiares de las víctimas masacradas solicitar la reparación de los daños causados, la condena contra alias Jorge 40 podría no ser superior a ocho años de cárcel teniendo en cuenta que el jefe paramilitar colabora en el proceso de Justicia y Paz.

La masacre en Trojas de Cataca

En la Ciénaga Grande hoy se respira nostalgia por los viejos tiempos que vivió esta despensa piscícola del norte de Colombia. En el gran espejo de agua hoy se refleja la desesperanza de miles de pescadores que no saben por qué los peces desaparecieron.

El hambre ronda a unas seis mil familias de pescadores que en estos momentos tienen sus fogones apagados, y miran la agonía de su fuente de trabajo, alimentación y vida, sin embargo se aferran a seguir viviendo en el complejo lagunar a la espera de mejores tiempos, pues son personas dueñas de un sexto

sentido que parece que es quien les indicara que algo bueno esta por pasar y que solo deben tener paciencia. De eso es que parecen que están llenos.

Quienes más sienten los rigores de la escasez de peces son los habitantes de Bocas de Cataca, un pueblo palafito ubicado en la desembocadura del río Aracataca, a unos 35 minutos de Pueblo Viejo (Magdalena), su cabecera municipal, en donde además del hambre y abandono les tocó soportar el desplazamiento masivo de sus habitantes. El jueves 11 de febrero del 2.000 fueron arrojados por el manto de la violencia, cuando unos 50 hombres de las AUC llegaron al caserío armados con motosierras, pistolas, machetes y fusiles y mataron a 11 pescadores acusados de ser colaboradores de la guerrilla.

Antes de la incursión de las autodefensas, en el pueblo habitaban unas 1.600 personas, funcionaban dos colegios con su comedor escolar, una estación de Telecom, la iglesia, una moderna sede del Sena, que ofrecía capacitación sobre artes de pesca y cultivos de variedades de peces, y había 185 casas levantadas sobre estacas de mangles, de techos de zinc. Era una de las despensas piscícolas de la región Caribe que entró en decadencia por los problemas ambientales de la ciénaga, y luego por culpa de la violencia se convirtió en un pueblo fantasma.

“Yo ayudaba a mi mamá. Ella vendía chicha y pan. El negocio era como una tienda, a la que llegaban pescadores y gente del pueblo. Vivíamos en una casa de tabla, color café, de dos habitaciones. En la parte de atrás había un patiecito de tierra donde criábamos animales. Teníamos una canoa, pero cuando nos fuimos se la robaron”, así resume como era su vida y la de su familia, Juana Moreno Hurtado, una mujer de 28 años de edad, quien logró salir con vida de Cataca el día en que, con lista en mano, los paramilitares llegaron buscando a supuestos auxiliadores de la guerrilla.

El jueves 10 de febrero, cuando la tarde caía, cinco lanchas llenas de hombres armados irrumpieron en la tranquilidad del pueblo. “Se metieron cuando ensayábamos pa’l carnaval. Las canoas venían llenitas, con unos 40 o 50 hombres cada una”, recordó Juana. El ruido de los motores alertó al pueblo, y de inmediato se regó la voz de que ‘los paracos’ habían llegado. Muchos de los pescadores que reposaban de sus faenas corrieron a esconderse en el monte con sus familias.

“Salí corriendo. En esos momentos no agarré nada. Nos escondimos con mi mamá y mis tres hermanos en el monte, en un cañito dentro de la canoa”. Cuenta que sólo salieron cuando la oscuridad cubrió todo.

“Cuando no escuchamos nada salimos a la casa, nos acostamos, no comimos nada, con esa angustia a nadie le da hambre. Nos quedamos acostados, escuchando los ruidos, las idas y venidas”. Fue la noche más larga que, en sus 28 años de vida, Juana había vivido, y la que sus tres pequeños hermanos jamás olvidarían.

Reunión en la iglesia

Esa misma tarde, antes de llegar a Trojas de Cataca, los paramilitares asesinaron a 7 pescadores que encontraron en su recorrido por la Ciénaga Grande. Desde las lanchas les dispararon a los hombres, cuya única defensa eran las atarrayas y remos de los botes, que no pudieron protegerlos de las balas. Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente, flotando.

Los paramilitares vestían prendas de uso privativo del Ejército y brazaletes de las AUC. Llegaron en compañía de un hombre identificado como Hernán Cantillo, alias ‘El Cole’, conocido por algunos pescadores por ser un guerrillero que se cambió de bando. Era el que los guiaba en las lanchas por el pueblo. Fueron pasando, casa por casa, citando a los hombres a una reunión en la iglesia, sector que se encuentran en tierra firme.

Santa Rosalía de Palermo, la patrona del pueblo, esa noche no escuchó las plegarias de Alfonso Moreno, Ángel Rodríguez, Arturo Pacheco y Pedro Pacheco, los pescadores que en la madrugada fueron sacados de la iglesia, llevados hasta la inspección de policía y fusilados.

“Los disparos en la madrugada sonaron como un taco”, recuerda Nilse Hurtado, una mujer de 54 años de edad, quien esa noche la pasó debajo de la cama, rezando con sus cuatro hijos pequeños.

Al amanecer, los paramilitares, luego de saquear una de las tiendas, advirtieron a los habitantes que si en 24 horas no habían abandonado el pueblo regresarían a matarlos. En las horas siguientes comenzó el éxodo en lanchas y canoas a Ciénaga, Tasajera, Palmira, Pueblo Viejo, La Isla y Soledad (Atlántico).

“No cogimos nada, salimos corriendo. Nos robaron todo lo que dejamos allá. Yo le decía a mi marido que ni muerta me iría del pueblo y míreme ahora vivo

aquí y ni modo de regresarme”, señala Nilse, quien reside en Palmira, en un rancho de cartón, pedazos de madera y zinc, soñando con volver, pero ya no tiene casa porque la suya se cayó, y sus hijos ya no quieren regresar.

Alejandro Moreno Guerrero, un pescador de 60 años de edad, curtido por miles de soles, cuenta que de las 185 casas hoy sólo quedan 15. Muchas están abandonadas o fueron desmontadas por los mismos propietarios que poco a poco se fueron llevando los restos de tablas y techos de zinc. No funcionan ni la escuela, ni el centro de salud, ni la sede de Telecom y ni la iglesia. Ahora son ruinas. Los 270 estudiantes y 12 profesores desaparecieron. El comedor del pueblo es hoy el aula en la que 32 niños reciben clases de la profesora Adelina Herrera, quien tampoco se quiso ir. “Aquí tengo todo”, dice, resignada.

La sede de la Inspección de Policía permanece destechada, sin puertas e invadida por la maleza. En una de las paredes están seis huecos que dejaron los impactos de balas de pistola que traspasaron los cuerpos de los cuatro pescadores masacrados aquella madrugada.

“A veces pienso que no era verdad, si nos hubiéramos quedado no nos habrían matado, y todavía tendríamos nuestras casas”, dice, en todo desconsolado, Nilse, quien sueña con regresar a su casa en donde, pese a la escasez de pescado y el olvido estatal, en la Ciénaga Grande eran felices.

Luto en El Morro

La guerra llegó a Nueva Venecia o El Morro, la madrugada del miércoles 22 de noviembre del 2000 cuando el aterrador sonido del tableteo de los fusiles despertó a los pescadores de este centenario palafito enclavado en la Ciénaga Grande, localizado a media hora en lancha de Sitionuevo (Magdalena).

Ese día, unos 50 paramilitares, pertenecientes al Frente Bernardo Escobar del Bloque Norte de las AUC, cuyo comandante era Tomás Freyle Guillén, alias ‘Esteban’, quien 9 meses antes había dirigido la masacre en Trojas de Cataca, ejecutó a 50 pescadores, 12 en el pueblo y el resto a lo largo del recorrido que realizó por el complejo lagunar, acusados de robar ganado, cometer atracos sobre la vía que comunica a Barranquilla con Ciénaga, y de colaborar con el ELN.

Al igual que Trojas de Cataca y Buenavista, El Morro es uno de los tres palafitos de la Ciénaga Grande, fundado por pescadores hace más de 100 años, en donde hasta el día de la masacre no pasaba nada, salvo peleas entre borrachitos que eran sofocadas con una trago de ron y al final terminaban en abrazos. Este mágico lugar, habitado por unas 4.000 personas, era visitado por turistas y fue escenario de grabaciones de producciones cinematográficas y de televisión nacional e internacional.

Pero la tranquilidad que aquí se vivía fue espantada durante las ocho horas que duró la nefasta visita del comando de las AUC, que dejó al apacible poblado sumido en medio de la tristeza, el llanto y el luto.

La caravana de la muerte

Los hombres del Bloque Norte partieron la tarde del 21 de noviembre del caserío conocido como Las Piedras, adelante del municipio de Salamina, en cinco lanchas con motores fuera de borda. Testigos de los hechos recuerdan que cada embarcación llevaba unos 10 hombres armados con fusiles, pistolas, machetes y vestidos con prendas de uso privativo del ejército colombiano, brazaletes distintivos de las AUC y las caras pintadas, que evitaban que el reflejo de la luna los delatara.

Alias ‘Esteban’ tenía órdenes expresas de Jorge 40 de realizar la incursión. Era guiado por ‘Giovanny’, un exguerrillero del ELN e informante de las AUC, quien señalaba a los supuestos colaboradores de la guerrilla, para que fueran asesinados, contó en su declaración a la Fiscalía Richar Manuel Fabras Romero, paramilitar desmovilizado que participó en la masacre. “Los supervisores eran alias ‘Brayan’, ‘Rafael’ y ‘Carro Loco’, mientras que ‘Giovanny’ nos decía quienes eran colaboradores de la guerrilla”, subrayó él, en su confesión dentro del proceso que llevó el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta.

Jesús Suárez Gutiérrez, un habitante de Nueva Venecia, que a apuño y letra ha tratado de reconstruir lo que ocurrió el 22 de noviembre del 2000 en su pueblo, cuenta que la caravana de la muerte subió por el río Magdalena rumbo a la ciénaga, entró por el caño Clarín y a las 11:21 p.m. llegó al lugar conocido como Kilómetro 13, un pequeño puerto donde los pescadores comercializan

el pescado que va a Barranquilla y Santa Marta. “Preguntaron si habían visto algo raro, y luego por seis personas auxiliadores de la guerrilla. Antes de irse mataron a los pescadores José Cruz Romero, Efraín Miguel Benthán Escorcía, Juan de Jesús De la Hoz Martínez y Eder Londoño González, a punta de cuchillo y bayonetas para no hacer ruido, y se llevaron a otros cinco como rehenes para que los guiaran por los caños”.

En su ruta hacía Nueva Venecia retuvieron a una embarcación, que lleva el nombre de ‘En Dios Confío’, en la que viajaban 12 pescadores con rumbo a Barranquilla a vender lo que habían sacado de la ciénaga esa noche. Los paramilitares los obligaron a tirar los peces al agua y devolverse con ellos.

Cuando promediaban las 2 de la madrugada, asegura Jesús, las lanchas llegaron a Nueva Venecia y se dividieron en grupos por el pueblo. “Unos se fueron para la emplanada donde se encuentra la iglesia, mientras que los otros pateaban puertas y llamaban a la gente a una reunión”. Según Jesús ‘los paras’ escogieron ese lugar por ser el único lugar en el pueblo donde hay tierra firme y una especie de plaza que utilizan los muchachos como cancha de fútbol.

Jesús recuerda que hacía más de un año, guerrilleros del ELN habían llegado al pueblo a advertir sobre la llegada de los paramilitares y las masacres que estos cometían a los que acusaban de colaborar con la guerrilla. La noticia generó pánico, por eso cuando los habitantes de El Morro se enteraron que las AUC habían llegado ya sabían a lo que se enfrentaban. Algunos de inmediato emprendieron la huida en silencio. Amparados por la oscuridad lograron llegar en canoas a los mangles y playones cercanos al caserío.

Jesús, quien recuerda los detalles de lo que ocurrió esa madrugada, cuenta que Juan Moreno, un pescador conocido, se fue por debajo de las casas avisándole en voz baja a la gente que los paramilitares se encontraban en la plaza y que tenían a varios capturados.

Rafael Gutiérrez Pérez, quien al lado de Amado Mejía, Rafael Moreno, Armando Acosta y su hijo Néstor, hacía parte de la lancha que los paramilitares devolvieron, contó que a un grupo lo encerraron en la iglesia de la Virgen del Carmen, mientras que otros afuera los interrogaban sobre el paradero de los colaboradores de la guerrilla.

“Los acostaron bocabajo y los pateaban, les caminaban por encima”, recuerda el viejo pescador, a quien se le humedecen los ojos al recordar las cuatro horas de terror que vivió ese día, y que no ha podido sacar de su cabeza el sonido de las disparos que les fueron pegando en la cabeza a cada uno de sus amigos tendidos en el piso, y la frase de despedida que lanzaron los verdugos: “Este es el aguinaldo”. 11 personas fueron asesinadas en ese lugar.

En otro lado del pueblo, los paramilitares disparaban contra las casas, reventaban puertas a patadas y culatazos de fusil, saqueaban las tiendas, y algunas viviendas; entraron y rompieron todo lo que encontraron a su paso. A una de las casas que llegaron fue a la de Jacinto Parejo Esquea, de 68 años de edad, a quien después de maltratarlo verbalmente lo mataron en la puerta delante de su familia.

Cuando el sol ya comenzaba a despuntar el comando de hombres salió de Nueva Venecia, rumbo hacia Buenavista, un palafito ubicado a 10 minutos. En su recorrido se encontraron con tres lanchas de pescadores sobre las cuales abrieron fuego indiscriminado, con sus fusiles.

“Era como si estuvieran jugando al tiro al blanco. Gente inocente, que no sabía lo que estaba pasando, cayó allí”, señala Juan Lobelo, un chalupero de la zona. El macabro recorrido continuó por los caños y ciénagas vecinas en donde asesinaron a otros pescadores que salían en sus canoas a cumplir sus faenas, y cuyo número no ha sido precisado oficialmente como quiera que algunos cuerpos fueron sepultados por los familiares antes de que llegara la Fiscalía a realizar el levantamiento, y otros que nunca aparecieron.

Algunos habitantes aseguran que avisaron a la Policía y el Ejército, pero sólo a las 3 de la tarde un helicóptero que traía una comisión del Ejército Nacional llegó a verificar la noticia de la masacre que ya se escuchaba por todas partes. Según los testigos, duraron menos de 15 minutos en el lugar.

Desde ese día, el terror y la zozobra se apoderaron de todos los pescadores de la Ciénaga Grande, pues el miércoles 22 de noviembre llegaron buscando a seis supuestos colaboradores de la guerrilla y terminaron masacrando a no menos de 40, entre los que se encontraban personas inocentes y conocidas, que el hecho de haberseles cruzado en el camino a los paramilitares les costó la vida.

La noche del 22 de noviembre del 2.000 los paramilitares masacraron en la Ciénaga Grande de Santa Marta a Gustavo Rafael Yépez Conrado, Nicolás Manuel Insignares García, Jorge Luís Nieto Álvarez, Erasmo Antonio De la Cruz Manjares, Edwin José Cruz Romero, Armando Antonio Acosta Suárez, Gerardo Antonio Escorcia Caballero, Emigdio Rafael Manga Mejía, Malfred Rafael Gutiérrez Pacheco, Fair Eugenio Miranda Niebles, Amado Rafael Mejía Mendoza, Joaquín Modesto Álvarez Charris, Milton Javier Gómez Barrios, Néstor Iván Acosta Suárez, Senén Antonio González Mejía, Orlando César Ayala Niebles, Ever Julio Rodríguez Mejía, Edwin Alfonso Gamero Castillo, Néstor Julio Ayala Suárez, Roque Jacinto Parejo Esquea, Javier Enrique Caballero Vergel, Pedro Erasmo Suárez Borrero, Bacilo Antonio De la Cruz Rodríguez, Juan Jesús de la Hoz Martínez, José Darío Moreno Retamozo, Iván Roque González Ferrer, Hugo Luís Escorza Santiago, Efraín Miguel Bentham Escorcia, Wilmer Enrique Mejía Mejía, José Asunción Marín Rodríguez, Eder Jovanys Lodoño González, Rafael Ángel Mendoza Martínez, Jorge Eliécer Altamar López (o Jorge Altamar López), Manuel Octavio Rodríguez Ayala, Martín Rafael Rodríguez Ayala y José Francisco Álvarez Rolong.

Al día siguiente comenzó el éxodo. Unas tres mil personas salieron desplazadas de Buenavista y Nueva Venecia a diferentes pueblos de la región. Sólo en Soledad (Atlántico), según cifras de la Defensoría del Pueblo, llegaron 213 familias, entre las que se encontraban muchas mujeres, niños y ancianos.

Diez años después muchos regresaron a rehacer sus vidas y el pueblo intenta recuperar su brillo y alegría de antaño, tratando de superar el doloroso recuerdo que los marcó para siempre, mientras que por los caños y ríos que desde siempre han llegado a la Cienaga Grande, entre los mangles y arenas doradas de este paraje olvidado de la geografía nacional se escuchan las voces y se dibujan los rostros de todas las víctimas que la guerra le quitó ha esta apacible región. ¡Paz en su tumba!

Referencias Bibliográficas

Colombia, Procuraduría General de la Nación. (2009). *Seguimiento a políticas públicas en materia de desmovilización y reinserción. En Derecho a la verdad, memoria histórica y protección de archivos*. Bogotá.

Colombia Nunca Más (2001).

<http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z7/Intro.html>

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2010, Octubre 21) Informe N° 88/06. Petición 1306-05 *Admisibilidad Masacre de Nueva Venecia Colombia*.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. (2010).

<http://www.cnrr.org.co/>

Dirección Nacional de Fiscalía, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2007, junio 19). Proceso: 935-A. Bogotá

Naciones Unidas, Consejo Económico y Social (2005). *Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Adición Comisión de Derechos Humanos* (2005, febrero 8). *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*. Autor: Diane Orentlicher. Extraído el 20 de noviembre de:

<http://www.idhc.org/esp/documents/PpiosImpunidad.pdf>

El Tiempo. (2002). *Manual de Redacción* (6ed). Bogotá: Casa Editorial El Tiempo.

- Exaverría, Xavier. (2006). *Memoria y Víctimas: una perspectiva ético-filosófica*. En Gómez ISA, Felipe- *El derecho a la memoria*. Bilbao: Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.
- Fisas, Vicenc. (2010) *Anuario 2010 de procesos de paz*. Barcelona: Icaria Editorial / Escola de Cultura de Pau, UAB.
- Grupo de Memoria CNRR. (2009). *Recordar y Narrar el Conflicto, herramientas para reconstruir memoria histórica*. Colombia. Bogotá: Pro-offset Editorial S.A.
- Hernández, Roberto., Fernández, Carlos. & Baptista, Pilar. (2006) *Metodología de la investigación*. (4a ed.). México: Mc Graw Hill.
- Hoyos, Juan José. (2001). *Escribiendo Historias*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, (2010, octubre 11) Sentencia ordinaria 47001-3107-001-2007-00104.
- Latorre, Edimer (2009). *De aplazados a desplazados: la realidad de los derechos de las personas en condición de desplazamiento forzoso en la ciudad de Santa Marta*. Bogotá: Fondo de publicaciones Universidad Sergio Arboleda.
- Latorre, Edimer, Camargo José Antonio y otros (2010). *Comunicación, memoria y resiliencia. Estudio de la memoria de las víctimas de la violencia en el Departamento del Magdalena*. Bogotá: Fondo de publicaciones Universidad Sergio Arboleda.
- Molano, Alfredo. (2001). *Desterrados crónicas del desarraigo*. Bogotá: El Áncora Editores.
- Molano, Alfredo (2009) *Ahí le dejo esos fierros*. Bogotá: El Áncora Editores.
- Molano, Frank (2009). *Reflexiones Metodológicas de segundo orden en la reconstrucción colectiva de las memorias de y con las víctimas de crímenes de Estado*. En Adrian Serna (Comp), *Memorias en Crisoles, propuestas teóricas, metodológicas y estratégicas para los estudios de la memoria*. (pp 25-39) Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas e Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano.
- Morales, G. & Herrera, L. (2009). *Noticia, Violencia y realidad una mirada a los contenidos de la prensa de Santa Marta*. Bogotá: Fondo de publicaciones Universidad Sergio Arboleda.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, (2004).
www.movimientodevictimas.org/

Pastoral Social (sf). programa_tevere.doc

PNUD, Colombia (2010). *¿Qué es el Banco de Buenas Prácticas? En Buenas Prácticas de Superación del Conflicto*. Extraído el 25 de noviembre de 2010 de: http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/banco_bpracticasshtml

Rey, Edgar (sf). *La historia doble de la Costa y las nuevas de hacer la historia caribe*. Extraído el 21 de noviembre de 2010 de:
<http://www.edgarreysinng.com/libros/ensayos/lahistoriadoblede lacostay lasnuevasformasdeestudiar lasociedadacaribe.pdf>

Rodríguez, Clemencia. Bayuelo, S. Cadavid, A. Durán, O. González, A. Tamayo, C. Vega, J. (2008). *Lo que le vamos quitando a la guerra (Medios ciudadanos en contextos de conflicto armado en Colombia)*. Bogotá: University of Oklahoma.

Ruiz, Martha. (2010, septiembre 20) *La Batalla por la memoria*. VerdadAbierta.com, Extraída el 23 de noviembre, 2010 de:
http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=2726

Velásquez, Cesar; Gutiérrez, Liliana; Salcedo, Alberto; Torres, Jesús & Valderrama, Jairo. (2005) *Manual de Géneros Periodísticos*. Bogotá: Ediciones Universidad de la Sabana.

Verdad Abierta.com, *paramilitares y conflicto armado en Colombia* (2010).
<http://www.verdadabierta.com/>

Verdad Abierta.com, *paramilitares y conflicto armado en Colombia* (2009, diciembre 19) *Las 333 Masacres del Bloque Norte*. Extraída el 26 de febrero del 2010 de:
<http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/nuncamas/2067-las-333-masacres-del-bloque-norte>

29. Revista Semana, (2001, enero 8). *Masacre de Ciénaga Grande de Santa Marta*. Extraída el 30 de Agosto del 2010 de:
<http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/40-masacres/409-masacre-de-ci-enaga-grande-de-santa-marta-noviembre-de-2000>

